

PROYECTO DE SUPRESIÓN

DEL

Arbitrio sobre los inquilinatos

MEDIANTE EL REPARTIMIENTO GENERAL

FORMULADO POR EL

Excmo. Sr. D. JOAQUÍN RUIZ GIMÉNEZ

ALCALDE PRESIDENTE



MADRID
IMPRESA MUNICIPAL

1916

AYUNTAMIENTO DE MADRID

PROYECTO DE SUPRESIÓN

DEL

Arbitrio sobre los inquilinatos

MEDIANTE EL REPARTIMIENTO GENERAL

FORMULADO POR EL

Excmo. Sr. D. JOAQUÍN RUIZ GIMÉNEZ

ALCALDE PRESIDENTE



MADRID

IMPRENTA MUNICIPAL

1916

MEMORIA

Dificultades que ofrece el procedimiento establecido por la ley Municipal.

Las dificultades que ofrece para su exacción el arbitrio sobre los inquilinatos, señalado como sustitutivo del impuesto de Consumos por el art. 6.º de la ley de 12 de junio último, dificultades que ha hecho verdaderamente insuperables la resistencia al pago, observada por un crecido número de los obligados, nacida de una corriente de opinión contraria al arbitrio, obligan al Excmo. Ayuntamiento a plantear la supresión de este tributo al amparo de la facultad discrecional que le reservó dicho precepto legal.

Dado el rendimiento total de los arbitrios y recursos concedidos por la mencionada ley, en el primer semestre de su implantación, y el déficit que ofrecieron algunos de ellos, necesitó el Ayuntamiento elevar las cuotas del arbitrio sobre los inquilinatos para el año actual, presuponiendo un producto de seis millones de pesetas. Esta es la suma que la Corporación municipal necesita obtener en compensación del arbitrio por los medios legales establecidos, esto es, por repartimiento general, pero con las garantías más sólidas de que la exacción resulte rápida, sencilla y ordenada, y sin molestias para los obligados al pago, que no podrá conseguirse sin modificar lo establecido en la ley Municipal en punto a evaluación y reparto de cuotas.

No desconoce el Ayuntamiento de Madrid que el repartimiento general aventaja en condiciones al impuesto personal directo, por cuanto, adoptando las formas de distribución equitativa y socialización del gravamen que caracteriza al segundo, limita la acción impositiva a lo indispensable para las cargas y servicios públicos, constituyendo por sí sólo la base de las haciendas municipales reputadas como mejor ordenadas en política financiera.

La vigente ley Municipal señala el repartimiento en su art. 136, como recurso para cubrir todas las atenciones del pueblo, en cuanto para ello no alcancen las rentas y productos de bienes, derechos o

capitales del Municipio y los arbitrios e impuestos ordinarios, haciendo extensivo a todos los vecinos y hacendados en proporción a los medios o facultades de cada uno; y el art. 138 establece las reglas para efectuarle. Esta reglamentación ha sido, a nuestro juicio, la causa de que la mayoría de los Ayuntamientos no hayan hecho uso del repartimiento, nutriendo, en su defecto, los presupuestos con arbitrios extraordinarios; y esa misma reglamentación de suyo complicada y obstrusa, impediría hoy en las grandes poblaciones hallar en el repartimiento el medio racional y único posible de sustituir el arbitrio sobre los inquilinatos, de no haberse creado el impuesto de utilidades, como habremos de demostrar. Tales son las dudas, omisiones y faltas de adaptación a los grandes núcleos urbanos que se advierten en el art. 138, en concordancia con el cap. III, título 2.º del Código fundamental de los Ayuntamientos, que, para demostrar su ineficacia en la materia de que tratamos, vamos a examinar muy someramente.

Por otra parte, la regla 1.ª del propio art. 138 de la ley Municipal, evidencia con toda claridad que el espíritu del legislador se dirige a que la materia imponible se constituya con todas las utilidades del individuo, radicantes en la población, aludiéndose expresamente en la regla 4.ª del apartado 2.º a los intereses de capitales o rentas públicas de cualquiera clase o procedencia, y es evidente, y lo confirma la sabia definición que hizo la ley de Presupuestos de 1900, que las utilidades no obtenidas por el trabajo, pueden formarse por la sola posesión de capital o por la asociación del capital y el trabajo. Estas rentas, pues, no pierden su condición de *utilidades*, y así como no deben de ser tratadas como aquéllas, tampoco pueden ser igualadas a las que produce el trabajo individual, como elemento de producción; y puesto que la propia regla 4.ª del párrafo segundo hace materia imponible las utilidades del trabajo y la regla 6.ª obliga a contribuir a los jornaleros, y, en general, a los varones mayores de diez y ocho años, no debe existir excepción a favor de nada que signifique utilidad, proviniendo de la posesión de cosas que la reporten o que sean susceptibles de engendrarla.

Esta idea que dejamos apuntada, en cuanto a la diferencia que económicamente es de apreciar respecto a las utilidades, nos conduce a señalar otra singularidad, como lo es la cuantía de la riqueza poseída, y, por consiguiente, las de las rentas o utilidades de que goza el individuo, pues nadie aprecia hoy de igual modo, ni sujeta bajo la inflexibilidad del tipo único para el gravamen al poseedor del capital

que le eleve sobre la categoría de rico, y que, por el hecho de poseer tanto, no se hace sentir el fisco, como al dueño de un capital moderado. La progresión del impuesto está tan universalmente admitida por las constantes enseñanzas de las modernas teorías de la ciencia económica, en sus diferentes escuelas, que no necesita de nosotros para proclamar la conveniencia de su implantación, por consideraciones de todos conocidas. No asentándose sobre tales esencias nuestra ley Municipal, precisa que, dentro del concepto general que para el reparto establece el art. 138, y muy especialmente, atendiendo al espíritu de proporcionalidad en el tanto por ciento de que se habla en el segundo párrafo de la cláusula 4.^a, se hacía también preciso hacer progresivo el tipo de gravamen sobre la utilidad total valuada.

De otro lado, por la regla 2.^a, apartado 5.^o del mismo art. 138 de la ley Municipal, se establece que a los comerciantes, industriales y demás comprendidos en las tarifas de la contribución industrial, se les valuará la utilidad imponible en proporción a la cuota que por este concepto satisfagan al Estado, no bajando de cinco ni excediendo de veinte veces el importe de dicha cuota.

Varias son las dudas que se presentan respecto a la aplicación de este precepto, siendo entre ellas la más importante el silencio que se observa respecto a la entidad a quien corresponde fijar las reglas para la determinación de las utilidades de cada industria, dentro de los límites máximo y mínimo que establece la ley. Punto es éste que necesitaría ser aclarado, pues, si bien, a nuestro juicio, correspondiendo al Ayuntamiento la facultad de determinar la cantidad total que haya de ser objeto de repartimiento y la que parcialmente ha de aplicarse a cada clase o sección, parece lógico que al Ayuntamiento también corresponde establecer *à priori*—para que la distribución se ajuste a la equidad—las bases de imposición para determinar la utilidad industrial computable, y que a esta determinación necesariamente tendrían que ajustarse los encargados del reparto.

Relacionado con esta misma cuestión, sería asimismo, indispensable, determinar si la utilidad imponible ha de evaluarse solamente por la cuota del Tesoro o por la acumulación de ésta y los recargos municipales; si las patentes, como comprendidas en las tarifas de contribución industrial, han de someterse, para la determinación de la utilidad imponible, a las mismas reglas que se adopten para los industriales; y, finalmente, si teniendo en cuenta la forma en que se lleva a cabo el reparto de la contribución industrial, ha de tomarse

como base, para la determinación de la utilidad imponible, la cuota reglamentaria o la que individualmente se aplique por reparto gremial a cada industrial.

Dada la cuantía de la suma total a repartir, no creemos que fuera conveniente realizar la exacción de una vez. Además, de hacerlo así, se cometería una verdadera arbitrariedad, por cuanto la propiedad urbana y los valores mobiliarios cambian continuamente y en grandes masas de poseedor, durante un año, y por ello el repartimiento no descansaría sobre los buenos y acertados principios en que está instituido en la ley; más seguir semanal o trimestralmente la Administración municipal el movimiento de transmisión de los bienes y rentas es absolutamente imposible, por costoso, molesto y vejatorio para los vecinos.

Si tales dificultades se presentan a la Administración municipal por lo que hace a la creación de las cuotas de repartimiento, no menos ofrecerían las operaciones preliminares, como formación de secciones para realizar el reparto, fijación de cuotas, reclamaciones y resolución de los agravios, etc., bastando la lectura del art. 138 de la ley Municipal, y reparar en los ejemplos que ofrecen en estas operaciones los pequeños pueblos, para convencerse de que en Madrid es impracticable el repartimiento general sobre tales bases o reglamentación.

Procedimiento de exacción que se impone en las grandes capitales.

Por fortuna, el actual sistema de contribuciones e impuestos del Estado y la organización que alcanza en nuestros días en punto a inspección y contabilidad, proporciona el medio mejor de realizar el repartimiento general, conforme a los principios de la ley, sin gastos notables para el Concejo y sin molestias inmotivadas para los contribuyentes, con la ventaja, además, de que la cuota anual establecida podrán satisfacerla fraccionada.

Fijado por el Ayuntamiento o por el Ministerio de Hacienda, el tipo del gravamen para los distintos conceptos de utilidades que señala el art. 138 de la ley Municipal, se realizará la exacción conjuntamente con la contribución o impuestos del Estado, al igual de como la practica para los recargos municipales sobre dichas contribuciones, percibiendo el Estado un tanto por ciento por el servicio de cobranza.

La exacción de la cuota correspondiente a los jornaleros o braceros, y, en general, a todo varón mayor de diez y ocho años, no comprendido en el repartimiento por otro concepto, puede fácilmente realizarse por medio de recibo mensual o por un timbre o sello municipal adherido al dorso de la cédula personal, por cuanto del padrón anual para la cobranza de este impuesto, se deducirán simultáneamente los obligados a contribuir al repartimiento por aquel carácter.

Para evitar retrasos en la confección de matrículas, listas cobratorias y demás, en lo referente a la contribución de urbana, rústica y pecuaria, el Ayuntamiento mantendría a sus expensas, en la Delegación de Hacienda, una sección de funcionarios municipales que, en en relación con la Administración de Rentas y Arbitrios municipales, formase los padrones y relaciones nominales de contribuyentes sujetos al repartimiento.

De igual modo, y con el mismo fin, montaría una sección dedicada a relacionar los obligados por el concepto de «Utilidades» en las tres tarifas del impuesto.

De este modo, y con un buen servicio en las oficinas municipales para el despacho rápido de las devoluciones por ingresos indebidos, podría llevarse a cabo, sin grandes molestias para las oficinas provinciales de la Hacienda, y ninguna para los contribuyentes, la exacción de la cuota de repartimiento.

Seguir el procedimiento de evaluación, reparto y cobranza que señala la ley Municipal, equivaldría a evidenciar que el repartimiento general es más molesto y ofrece mayores dificultades a la Administración que el arbitrio sobre los inquilinatos.

Modificaciones que se proponen de la ley Municipal y de la de 12 de junio de 1911.

Artículo 136, párrafo quinto.—Teniendo los arbitrios sobre los inquilinatos y sobre las carnes frescas y saladas, el carácter de ordinarios, como establecidos por la ley de 12 de junio de 1911, en sustitución del impuesto de Consumos, se hace preciso armonizar con dicho art. 136, el 6.º de la ley de 12 de julio, y disponer que «los Ayuntamientos, si renuncian a todos o a algunos de los arbitrios señalados por dicho art. 6.º, podrán acudir al repartimiento general».

Artículo 137, regla 7.^a—Es de absoluta necesidad aclarar este precepto, declarando la subsistencia de los arbitrios sobre industrias que se ejerzan en la vía pública, en el caso de que el Ayuntamiento renuncie a recargar con el 5 por 100 la cuota del repartimiento señalado a estas industrias.

Artículo 138, regla 1.^a—(Igual).

Regla 2.^a, base 1.^a—Se fija como utilidad imponible la renta resultante de deducir del líquido imponible amillarado, las cuotas y recargos por todos conceptos.

Base 2.^a—Se evalúa de igual modo que en el caso anterior y en la proporción que señala la ley Municipal.

Base 3.^a—(Igual).

Base 4.^a—(Igual).

Base 5.^a—Servirá de base la cuota con que figuren en las matrículas de la contribución industrial.

Base 6.^a—En la imposibilidad material de evaluar el salario de todos los que viven de un jornal, se adopta como base general el jornal de tres pesetas, devengado durante trescientos días, o sean 900 pesetas, de las que se rebaja la tercera parte, conforme a la ley Municipal.

Base 7.^a—Se evaluará la utilidad imponible en razón de la renta del local que ocupen.

Base 8.^a—(Igual).

Reglas 3.^a, 4.^a, 5.^a, 6.^a y 7.^a—El Ayuntamiento, ante las complicadas operaciones que envuelve el procedimiento de la ley Municipal y los abusos a que se presta tratándose de grandes poblaciones, parte de las matrículas de la Hacienda para fijar la utilidad imponible individual, máxime que en urbana está comprobada la riqueza y en industrial existen los repartos gremiales. En cuanto a las utilidades por rentas de capitales, es indudable que están bien conocidas por las formalizaciones para pago del impuesto de utilidades.

Regla 8.^a—(Igual).

Regla 9.^a—(Igual).

Artículo 14, párrafo cuarto de la ley de 12 de junio de 1911.—Debe ser reformado en el sentido de que el tipo de gravamen para el repartimiento sea fijado por el Excmo. Sr. Ministro de Hacienda.

APÉNDICE NÚMERO 1

Primer proyecto de *bases* para el establecimiento y régimen del repartimiento general de la Villa y Corte de Madrid.

1.^a El tipo de gravamen será de 1'50 por 100 de las utilidades valoradas.

El correspondiente a las Compañías mercantiles que exploten industria o comercio en Madrid, será de 8'33 por 100 sobre la renta íntegra del local, sin perjuicio de lo que deban satisfacer las personas que las constituyan por las utilidades individuales, si a ello vi-
nieran obligadas.

2.^a El repartimiento general, será extensivo a las personas si-
guientes por todas las utilidades que obtengan en este distrito munici-
pal, sea cual fuere su naturaleza:

Primero. A los vecinos del distrito municipal.

Segundo. A los propietarios forasteros, que según el art. 27 de la ley Municipal, tengan consideración de vecinos.

Tercero. A los que según el mismo artículo, tengan el concepto y consideración de propietarios.

Cuarto. A los colonos, arrendatarios o aparceros de fincas rús-
ticas que no residan en este distrito.

Se exceptúan únicamente del repartimiento, los pobres de solem-
nidad, los acogidos en los establecimientos de Beneficencia y las
clases de tropa de tierra y mar.

3.^a La utilidad imponible de cada contribuyente, se establece con
arreglo a las siguientes bases:

Primera. A los propietarios de fincas urbanas, por la cantidad
resultante de deducir del líquido imponible, por que contribuyen o
por que deban contribuir al Estado, la cuota del Tesoro, el recargo
municipal ordinario y extraordinario, y los aumentos legales por admi-
nistración y cobranza.

Segunda. A los propietarios de fincas rústicas, o, en su ca-
so, a los colonos, arrendatarios o aparceros, por una suma igual
a vez y media de la renta que produzca la finca o que pudiera pro-
ducir.

Tercera. A los propietarios de fincas urbanas o rústicas, que no sean vecinos de Madrid, se rebajará un quinto del líquido imponible.

Cuarta. A los residentes que perciban sueldos, pensiones, censos o intereses de cualquier clase o procedencia, se les evaluará como utilidad líquida el importe de estas sumas.

Quinta. A los comerciantes e industriales y demás comprendidos en las tarifas de la contribución industrial, se les evaluará por la suma equivalente a veinte cuotas de la contribución con que figuren en las matrículas.

Sexta. A los jornaleros o braceros, y, en general, todo varón mayor de diez y ocho años, no comprendidos en el reparto por otro concepto, se les valúa la base imponible de 300 pesetas, tercera parte del haber medio individual durante un año.

Séptima. A los vecinos no comprendidos en las bases precedentes, se les evaluará la utilidad imponible en el 5 por 100 de la renta íntegra del local que ocupen.

4.^a La cobranza de las cuotas del reparto por los conceptos de propietarios o arrendatarios, comerciantes o industriales y perceptores de sueldos, pensiones e intereses, se verificará por las dependencias de la Hacienda pública, conjuntamente con las contribuciones e impuestos del Estado.

La recaudación de las cuotas asignadas a las Compañías mercantiles y a los jornaleros, y a sus asimilados, se realizará directamente por el Ayuntamiento; las primeras por recibo trimestral y las segundas de una sola vez, y por medio de un timbre municipal adherido a la cédula personal, representativo del pago de la cuota del repartimiento, verificandose por semestres la correspondiente a los braceros.

5.^a Durante el mes de octubre, deberán presentarse en el Ayuntamiento las reclamaciones u observaciones que se consideren oportunas, respecto a la calificación por razón de residencia o vecindad a que se refiere el art. 27 de la ley Municipal y las presentes disposiciones; debiendo acompañarse los documentos probatorios pertinentes.

Estas reclamaciones examinadas y resueltas por la Alcaldía, se relacionarán y pasarán a la oficina provincial de Hacienda para la toma de razón. Pasado dicho plazo, no se substanciará reclamación alguna, por cuanto la cuota del repartimiento se entiende devengada por año.

6.^a Las reclamaciones de devolución de ingresos indebidos, se dirigirán al Excmo. Sr. Alcalde Presidente, haciéndose las devoluciones por la Caja municipal.

7.^a El Estado percibirá por el servicio de cobranza, en las distintas operaciones que comprende, el 4 por 100 de las sumas que recaude, sin perjuicio del abono de los gastos que se les produzcan por nuevas impresiones y libros.

APÉNDICE NÚMERO 2

Cálculo para determinar la utilidad imponible de los contribuyentes.

URBANA (CAPITAL)

Contribuyentes, 8.023.		
Líquido imponible.....	58.632.390	
A deducir:		
Gravamen del Tesoro del		
20'995 por 100.....	12.309.872	
Recargo municipal y de Ad-		
ministración.....	2.585.073	14.894.995
		<hr/>
<i>Utilidad imponible.....</i>	43.737.445	
Tipo de gravamen al 1'50 por 100.....		656.061

URBANA (ENSANCHE)

Contribuyentes, 5.133.		
Líquido imponible.....	17.983.900	
A deducir:		
Gravamen del Tesoro y extra		
ordinario, 26'230 por 100..	4.717.176	
Recargo municipal y de Ad-		
ministración.....	990.608	5.707.784
		<hr/>
<i>Utilidad imponible.....</i>	12.276.116	
Tipo de gravamen al 1'50 por 100.....		184.141

RÚSTICA Y PECUARIA

Contribuyentes, 507.		
Líquido imponible.....	279.941	
A deducir:		
Gravamen del Tesoro, 14		
por 100.....	39.191	
Recargo municipal y de Ad-		
ministración.....	8.230	47.421
		<hr/>
<i>Utilidad imponible....</i>	232.520	
Tipo de gravamen al 1'50 por 100.....		3.487
		<hr/>
<i>Suma y sigue.....</i>		843.689

Suma anterior 843.689

INDUSTRIAL

Contribuyentes, 22 760.
 Importe de cuotas del Tesoro 5.930.383
 Múltiplo 20 de las cuotas..... 118.607.672
 Tipo de gravamen de 1'50 por 100, equivalente al 30
 por 100 sobre la cuota..... 1.779.115

UTILIDADES

Tarifa primera del impuesto. (Procedentes del trabajo).
 Contribuyentes, 7.200.

Utilidades..... 41.161.000

Tarifa segunda. (Procedentes del capital, no incluida la Deuda pública).

Contribuyentes, 12.796.

Utilidades..... 202.472.000

243.633.000

A deducir:

Por lo que pueda corresponder a personas
 no residentes en Madrid, 15 por 100. . . . 36.544.950

DEUDA PÚBLICA

Intereses de la misma..... 337.763

Puede corresponder a residentes en Madrid. 125.000.000

Utilidad imponible..... 332.088.050

Tipo de gravamen, 1'50 por 100..... 4.981.320

Tarifa tercera. (Procedentes del capital y del trabajo).

Contribuyentes, 314.

Renta imponible..... 3.049.794

Tipo de gravamen, 8'33 por 100 de la renta local.... 254.047

Jornaleros, y, en general, varones de más de diez y ocho
 años, no clasificados anteriormente, 172 512.

Totales de haberes anuales, a razón de 900

pesetas..... 155.260.800

A deducir ²/₃ con arreglo a la ley Municipal. 103.507.200

Base imponible..... 51.753.600

Tipo de gravamen, 1'50 por 100, o 4'50 pesetas por indi-
 viduo..... 776.304

TOTAL..... 8.634.475

APLICACIÓN

Administración y cobranza: 6 por 100	518.068	
Fallidos o coeficientes de seguridad	2.116.407	
Compensación del arbitrio sobre inquilinato.	6.000.000	8.634.475
		<u>Igual.</u>

SEGUNDA NOTA A LA MEMORIA

En la Memoria se preconiza, en efecto, la imposición progresional, sin otro objeto que demostrar la falta de adaptación a los grandes núcleos urbanos del repartimiento reglado por la ley Municipal, y deducir, en conclusión, que aquél es impracticable en Madrid bajo la estricta aplicación de la ley de Ayuntamientos.

Tratando la Alcaldía de reducir al límite posible las operaciones precedentes y subsiguientes a la recaudación de las cuotas del repartimiento, y comprendiendo que la progresión es, efectivamente, incompatible con el sistema de retención directa que adopta para la mayor parte de la cifra del repartimiento, sienta en el proyecto de bases que se acompaña, el tipo único de gravamen.

Estimado que sea en principio el proyecto que se somete al Excelentísimo Sr. Ministro de Hacienda, y fijadas, a modo de definitivas, las bases del repartimiento y de recaudación, el Ayuntamiento solicitará en forma, del Gobierno de S. M., la autorización para la cobranza por el Estado de determinadas cuotas.

Propuesta de reforma.

Ley Municipal, art. 136, párrafo quinto y ley de 12 de junio, artículo 6.º—No se aspira a sustituir el arbitrio sobre las carnes con el repartimiento general. Se trata, únicamente, de hacer legalmente posible la subsistencia del reparto, en caso de suspensión o transformación del arbitrio sobre las carnes.

Nuestra opinión sobre el repartimiento es que reúne ventajas técnicas para obtener recursos locales en crecida suma, si bien, el procedimiento señalado por la ley Municipal para llegar a la matrícula del reparto, tratándose de grandes poblaciones, a más de prestarse a grandes errores e injusticias, retrasaría considerablemente las operaciones. De aquí que, respetando la ley Municipal y la de 12 de junio, en cuanto es prácticamente posible, tengamos que acudir a las matrículas de contribuciones territorial y subsuelo como elementos ya preparados, y a la acción del Estado, para evitar molestias a los contribuyentes con duplicidad de recibos, etc., etc.

Ley Municipal, art. 137, regla 7.^a—La reforma no afectará a personas infelices, sino al gremio de alquiladores de carruajes de lujo; a los vendedores ambulantes (que desean y les conviene pagar el arbitrio para mantener cierto derecho a ejercer la industria); a los dueños de coches y carros de punto, por cuyos conceptos percibe el Ayuntamiento anualmente 100.000, 150.000, 270.000 y 35.000 pesetas, respectivamente, y otros varios conceptos.

Ley Municipal, art. 138, regla 2.^a, base 1.^a—Es aceptable la observación y se tendrá por deducible del líquido imponible únicamente la cuota del Tesoro.

Base 5.^a—Es aceptable la observación.

Base 6.^a—No se pretende cambiar la competencia para determinar el haber medio del bracero. Esta estimación debe practicarse por los organismos municipales, y por lo que a Madrid se refiere, existiendo numerosos jornaleros con 5, 6 y 7 y hasta con 12 pesetas de haber y base de trabajo, con descanso obligatorio de sesenta días al año, no creemos elevado el haber medio general, para toda la población obrera de tres pesetas en trescientos días.

Base 7.^a—Es admisible la observación, y, en consecuencia, la base 3.^a, regla 7.^a del proyecto de *bases del repartimiento* puede quedar redactada del tenor siguiente, en armonía con la ley Municipal.

«A los vecinos no comprendidos en las reglas precedentes, por no constar inscriptos o acreditados como comerciantes, industriales perceptores de sueldos, pensiones o rentas de fincas o capitales, o jornaleros, ni como exceptuados con arreglo a la base 2.^a, caso cuarto, párrafo segundo, se les evaluará la utilidad imponible, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 27 y regla 3.^a del 138 de la ley Municipal, teniendo en cuenta los signos exteriores de la riqueza, tales como el valor del mueblaje, alquiler de la casa, número de criados y otros análogos. La Administración de Rentas y Arbitrios municipales, formará en el mes de octubre relación nominal de los vecinos que se hallen en dichas circunstancias, con expresión de la naturaleza y número de los objetos determinantes de la riqueza de cada individuo. Esta relación se pondrá al público por término de diez días, en cuyo plazo, los interesados podrán presentar las reclamaciones que consideren oportunas. La Comisión de Hacienda examinará la relación y las reclamaciones, proponiendo al Ayuntamiento la resolución que proceda y la cantidad total imponible. Contra el acuerdo del Ayuntamiento podrán

recurrir los interesados ante la Junta municipal, en término de ocho días, con los demás recursos autorizados por la ley Municipal».

Reglas 3.^a, 4.^a, 5.^a, 6.^a y 7.^a—El Ayuntamiento no pretende penetrar en el secreto de la clientela de los Bancos y banqueros; le basta con que el Estado haga extensivas a las cuotas del repartimiento las prevenciones, en punto a penalidad por ocultación o defraudación, del impuesto de utilidades.

Cualquier medida que sin quebantar el secreto de la clientela evite, en lo posible, la ocultación, será aceptada por el Ayuntamiento, como asimismo la transformación de las cuotas sobre las rentas de valores mobiliarios en una participación equivalente en los ingresos del Tesoro por impuesto de utilidades.

No puede existir dificultad insuperable en la facturación de cupones, conocida como es de los Bancos y banqueros la residencia de los clientes por la declaración que precede a la imposición de depósitos, apertura de cuenta corriente de crédito, etc.

El Ayuntamiento facilitaría las facturas del modelo y color que se le indicasen y abonaría a los Bancos y banqueros el premio que se decidiese por su servicio de Tesorería.

El Ayuntamiento montaría en la Delegación de Hacienda un servicio auxiliar tan extenso como requiriesen los trabajos de preparación de los recibos de urbana, rústica y pecuaria y subsidio, sin retraso alguno para el Estado, abonando la impresión de los nuevos modelos de recibos, listas cobratorias y de cargo, etc.

Los cotejos de las matrículas de territorial e industrial, tan en absoluto como se indica, no los creemos de necesidad. La singularidad de cuota para los propietarios que no tengan la consideración de vecinos de Madrid y para los colonos, arrendatarios o aparceros, no es tan extensa que dificultara las operaciones.

Regla 8.^a—Siendo nuestro propósito hacer fáciles y breves las operaciones, el Ayuntamiento renunciaría, en caso preciso, a recargar las cuotas con el 6 por 100, quedando establecida la siguiente base al proyecto: «Los contribuyentes que en virtud del derecho que tiene establecido el Estado para la contribución territorial, anticipen el pago de los recibos, se les bonificará la cuota del repartimiento en el mismo tanto por ciento que tiene señalado la Hacienda pública».

Regla 9.^a—Es acertada la observación, y puede, en consecuencia, redactarse del tenor siguiente: «Los inquilinos de fincas urbanas arrendadas a una sola persona cuyo dueño, administrador o encarga-

do no residiese en Madrid, retendrá al hacer el pago de la renta la cuota de repartimiento que hubiese satisfecho, y los colonos, arrendatarios o aparceros de fincas rústicas, los dos tercios de la cuota».

Ley de 12 de junio de 1911, art. 14, párrafo cuarto.—De acuerdo en que el tipo del gravamen es el coeficiente obtenido de distribuir entre los obligados el importe de las atenciones municipales que no queden cubiertas con los recursos ordinarios y recargos máximos legales.

Entendía la Alcaldía que al Gobierno debía corresponder cuidar de que el reparto respondiese al exclusivo fin que está señalado por la ley Municipal, y de ahí la reforma propuesta; mas puede quedar encomendada a la Junta municipal la fijación de tipo del gravamen.

Cómputo del rendimiento del reparto.

Ya se ha dicho en otro lugar que, aceptando las observaciones, se deducirá del líquido imponible de urbana y rústica únicamente la cuota del Tesoro, y que no se rebajará el recargo extraordinario de 4 por 100 de Ensanche.

Se ha aceptado para industria y comercio el múltiplo 15 sobre las cuotas consolidadas.

Utilidades.

La Alcaldía no posee otros datos sobre este impuesto que los antiguos e insuficientes para los cálculos que nos ocupan, que contienen las estadísticas publicadas por el Ministerio de Hacienda con relación al año 1907. De desear es, dentro del propósito de acierto que, en bien de todos, perseguimos, que el Ministerio con los grandes elementos y capacidades de que dispone, aporte a las razones que expone, atinadas en su mayoría seguramente, los valores numéricos que las producen, para que se establezcan la inteligencia y conformidad que deseamos. En tanto, se nos dan a conocer los valores estadísticos necesarios para establecer con exactitud los cálculos, exponaremos que, en opinión de personas conocedoras de estos asuntos por razón de sus cargos y profesión, el importe de los intereses de valores que perciben las personas residentes en Madrid, en los vencimientos de 1 de abril, 1 de julio y 1 de octubre, es de 45 millones de pesetas en cada trimestre, y de 60 millones en 1 de enero, en total 195

millones, que difieren 86 de la cifra tomada por base por el Ayuntamiento, y que representaría una baja en los productos del reparto de 1.290.000, pesetas comprendida, por tanto, dentro del coeficiente de seguridad establecido, con más la contribución directa del Estado. Además, no hay que olvidar:

- 1.º Que el gravamen, recae sobre los residentes; y
- 2.º Que si bien las Compañías mercantiles que exploten industria o comercio, no pueden comprenderse en el reparto, tanto la ley Municipal, como la de 12 de junio, no excluyen del repartimiento las utilidades individuales de los residentes que procedan de acciones u obligaciones de otras varias Compañías.

Jornaleros.

El número de 172.512 computado en el proyecto, no se ha obtenido del Censo de 1900, ni del padrón de habitantes de 1910: se ha deducido del empadronamiento para el impuesto de Cédulas personales del año actual, tomando todos los jornaleros y varones mayores de diez y ocho años sin profesión, estudiantes, etc.

Por las razones expuestas en otro lugar, no puede admitirse la computación del haber medio y jornada anual que se oponen al proyecto, por cuanto el jornal de 2'50 pesetas es ya en Madrid el mínimo, y el obrero no huelga 105 días al año.

SEGUNDA NOTA A LAS BASES DEL REPARTIMIENTO

La propuesta de sustitución del arbitrio sobre los inquilinatos, no debe ser juzgada con la crítica que permite una idea nueva, sino con la consideración que exige el propósito del Gobierno, elevado a ley; y así como la Alcaldía reserva sus juicios en materia de política económica y trata, por el contrario, de utilizar el repartimiento como integrante de la obra del Gobierno, es de esperar que, en su propósito de buscar una solución al desacreditado arbitrio sobre los inquilinatos, no ha de encontrar más que ayuda y consejos para consolidar lo fundamental de dicha ley, como es su deber.

Si, como creemos, no debe, ni siquiera iniciarse, una radical reforma de la ley de 12 de junio y el arbitrio sobre los inquilinatos ha caído en la impopularidad, no queda otro recurso utilizable que el repartimiento en sus principales esencias, dejando para más adelante el perfeccionamiento de la imposición que, una observación continuada y celosa, vaya marcando.

Evidentemente, que debiera contribuir la aristocracia territorial forastera, mas para ello se impondría una reforma tan radical de los artículos 136 y 138 de la ley Municipal, que equivaldría a borrar el reparto de la ley fundamental de los Ayuntamientos, dado el principio en que descansa.

Por lo que hace a los proletarios, habría que discernir bien el concepto para aplicar con justicia la liberación sostenida de contrario. Sobre este respecto, la Alcaldía contribuye al criterio que dominó en la *Comisión extraparlamentaria* para sustituir el impuesto de Consumos, y se afirma hoy más en la conveniencia de que contribuyan todos, ante las enseñanzas que han traído las exenciones hechas para la exacción del arbitrio sobre inquilinatos.

Los inconvenientes de este arbitrio observados en Madrid, creemos que se presentarán en las demás grandes capitales de España, y, por consiguiente, la reforma legislativa que se propone puede y debe tener carácter general. Siendo así, no puede ocurrir la liberación de las rentas mobiliarias que se presiente.

El dato de la defraudación que se cometería en el caso apuntado del alquiler de 76.000 pesetas anuales, no puede servir de argumen-

to, puesto que el Sr. Marqués de Larios, a quien sin duda se hace referencia, es una excepción del caso general.

No es necesario el cotejo que se dice con los padrones de vecindad. En el proyecto de Ordenanza del repartimiento, ya se consigna que durante el mes de octubre se recibirán en el Ayuntamiento las reclamaciones para *exclusión*.

Respecto a la determinación de las rentas mobiliarias, no vemos los peligros ni las dificultades apuntadas.—Se dice, que en los países con impuesto sobre la renta, los comisionados para la estimación determinan el importe de la renta de cada procedencia, y que nuestra ley Municipal encomienda esa determinación a los contribuyentes de la Junta municipal reunidos en secciones.—Es de presumir que aquellos comisionados y las secciones de la Junta municipal necesitan, por lo menos, inquirir de las dependencias del Estado, Provincia, Municipios y Bancos, etc., para hacer la estimación, ¿cómo va a negarse al Ayuntamiento lo que es permitido a un grupo de contribuyentes? Además, así como el Estado tiene señaladas severas penas a los Bancos y Sociedades para en caso de ocultación o defraudación del impuesto de utilidades, del mismo modo podría procederse con relación a las cuotas del repartimiento. Esto, unido a que la banca, en general, conoce por manifestación y hasta por declaración individual la vecindad, y, por lo menos, la residencia de sus clientes o comitentes, aleja los pesimismos en que se inspira la impugnación.

Si no se quiere dar acción directa a los Ayuntamientos en las rentas mobiliarias, otórgueseles un recargo sobre el impuesto de utilidades, tarifa 1.^a y 2.^a, y siempre que el tipo de ese recargo represente el 1'50 por 100 de las utilidades, deducido el impuesto del Estado, el de Madrid se tendrá por bien compensado al suprimir el arbitrio de inquilinato.

La ley Municipal no permite comprender en el reparto a los residentes en Madrid, sin vecindad en el mismo, por las fincas que posean fuera de esta capital.—Únicamente les pueden ser imputadas en Madrid las demás utilidades que obtengan.—Modificar sobre este respecto la ley Municipal, equivaldría a tanto como suprimir de ella y de la ley de 12 de junio el repartimiento, y la Alcaldía, no tiene otro propósito que asentar del mejor modo la ley sustitutiva de Consumos, y esto no puede lograrse prácticamente más que con la decidida ayuda del Estado para las operaciones de recaudación de las cuotas por rentas de fincas, industria y comercio, sueldos e intereses de capitales.

APÉNDICE NÚMERO 3

Bases definitivas para el repartimiento general.

En virtud de la facultad que establece el art. 6.º de la ley de 12 de junio de 1912 y de la autorización concedida al Excmo. Ayuntamiento, se procederá a verificar un repartimiento general entre las personas obligadas por virtud de la ley Municipal, con arreglo a las siguientes

B A S E S

1.ª El tipo de gravamen será de 1'50 por 100 de las utilidades valoradas.

El correspondiente a las Compañías mercantiles que exploten industrias o comercio en Madrid, será de 8'33 por 100 sobre la renta íntegra del local, sin perjuicio de lo que deban satisfacer las personas que las constituyan por las utilidades individuales, si a ello vinieran obligadas.

2.ª El repartimiento general será extensivo a las personas siguientes por todas las utilidades que obtengan en este distrito municipal, sea cual fuere su naturaleza:

Primero. A los vecinos del distrito municipal.

Segundo. A los propietarios forasteros, que según el art. 27 de la ley Municipal, tengan consideración de vecino.

Tercero. A los que, según el mismo artículo, tengan el concepto y consideración de propietarios.

Cuarto. A los colonos, arrendatarios o aparceros de fincas rústicas que no residan en el distrito.

Se exceptúan únicamente del repartimiento los pobres de solemnidad, los acogidos en los establecimientos de beneficencia y las clases de tropa de tierra y mar.

3.ª La utilidad imponible de cada contribuyente se establece con arreglo a las siguientes bases:

Primera. A los propietarios de fincas urbanas por la cantidad resultante de deducir del líquido imponible porque contribuyan o porque deban contribuir al Estado la cuota del Tesoro.

Segunda. A los propietarios de fincas rústicas, o, en su caso, los colonos, arrendatarios o aparceros, por una suma igual a vez y media de la renta que produzca la finca o que pudiera producir.

Tercera. A los propietarios de fincas urbanas o rústicas, que no sean vecinos de Madrid, se rebajará un quinto del líquido imponible.

Cuarta. A los residentes que perciban sueldos, pensiones, censos o intereses de cualquier clase o procedencia, se les valorará como utilidad líquida el importe de estas sumas.

Quinta. A los comerciantes e industriales y demás comprendidos en las tarifas de la contribución industrial, se les evaluará por la suma equivalente a quince cuotas de la contribución con que figuren en las matrículas.

Sexta. Los jornaleros o braceros, y, en general, todo varón mayor de diez y ocho años, no comprendido en el reparto por otro concepto, se les valúa la base imponible en 300 pesetas, tercera parte del haber medio individual durante un año.

Séptima. A los vecinos no comprendidos en las reglas precedentes, por no constar inscriptos o acreditados como comerciantes, industriales, perceptores de sueldos, pensiones o rentas de fincas o capitales o jornaleros, ni como exceptuados con arreglo a la base 2.^a, caso 4.º, párrafo segundo, se les evaluará la utilidad imponible, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 27 y regla 3.^a del 138 de la ley Municipal, teniendo en cuenta los signos exteriores de la riqueza, tales, como el valor del mueblaje, alquiler de la casa, número de criados y otros análogos. La Administración de Rentas y Arbitrios municipales, formará en el mes de octubre, relación nominal de los vecinos que se hallen en dicha circunstancia, con expresión de la naturaleza y número de los objetos determinantes de la riqueza de cada individuo. Esta relación se expondrá al público, por término de diez días, en cuyo plazo los interesados podrán presentar las reclamaciones que consideren oportunas. La Comisión de Hacienda examinará la relación y las reclamaciones, proponiendo al Excmo. Ayuntamiento la resolución que proceda y la cantidad total imponible. Contra el acuerdo del Ayuntamiento podrán recurrir los interesados ante la Junta municipal, en término de ocho días, con las demás autorizados por la ley Municipal.

4.^a La cobranza de las cuotas del reparto por los conceptos de propietarios o arrendatarios, comerciantes o industriales y perceptores de sueldos, pensiones e intereses, se verificará por las dependen-

cías de la Hacienda pública, conjuntamente con las cuotas de las contribuciones e impuestos del Estado.

La recaudación de las cuotas asignadas a las Compañías mercantiles y a los jornaleros y sus asimilados, se realizará directamente por el Ayuntamiento: las primeras por recibo trimestral y las segundas de una sola vez, y por medio de un timbre municipal adherido a la cédula personal, representativo del pago de la cuota del repartimiento, verificándose por semestres la correspondiente a los braceros.

5.^a Durante el mes de octubre deberán presentarse en el Ayuntamiento las reclamaciones u observaciones que se consideren oportunas, respecto a la calificación por razón de residencia o vecindad a que se refiere el art. 27 de la ley Municipal y las presentes disposiciones; debiendo acompañarse los documentos probatorios pertinentes.

Estas reclamaciones, examinadas y resueltas por la Alcaldía, se relacionarán y pasarán a la oficina provincial de Hacienda para la toma de razón. Pasado dicho plazo no se substanciará reclamación alguna, por cuanto la cuota del repartimiento se entiende devengada por año.

6.^a Las reclamaciones de devolución de ingresos indebidos se dirigirán al Excmo. Sr. Alcalde Presidente, haciéndose las devoluciones por la Caja municipal.

7.^a El Estado percibirá por el servicio de cobranza, en las distintas operaciones que comprende el 4 por 100 de las sumas que recaude, sin perjuicio del abono de los gastos que se le produzcan por nuevas impresiones y libros.

8.^o Los contribuyentes que, en virtud del derecho que tiene establecido el Estado para la contribución territorial, anticipen el pago de los recibos, se les bonificará la cuota del repartimiento en el mismo tanto por ciento que tiene señalado la Hacienda pública.

9.^a Los inquilinos de fincas urbanas arrendadas a una sola persona, cuyo dueño, administrador o encargado no residiese en Madrid, retendrán, al hacer el pago de la renta, la cuota del repartimiento que hubiesen satisfecho, y los colonos, arrendatarios o aparceros de fincas rústicas, los dos tercios de la cuota.

CÁLCULO PARA DETERMINAR LA UTILIDAD IMPONIBLE DE LOS CONTRIBUYENTES

URBANA (CAPITAL)

Contribuyentes, 8,023.		
Líquido imponible.....	58.632.390	
A deducir:		
Gravamen del Tesoro del 20'995 por 100. . .	12.309.872	
<i>Utilidad imponible.....</i>	<i>46.322.518</i>	
Tipo de gravamen, 1'50 por 100.....		694.837

URBANA (ENSANCHE)

Contribuyentes, 5,133.		
Líquido imponible.....	17.983.900	
A deducir:		
Gravamen del Tesoro.....	3.775.719	
<i>Utilidad imponible.....</i>	<i>14.208.181</i>	
Tipo de gravamen, 1'50 por 100.....		213.122

RÚSTICA Y PECUARIA

Contribuyentes, 507.		
Líquido imponible.....	279.941	
A deducir:		
Gravamen del Tesoro, 14 por 100.....	39.191	
<i>Utilidad imponible.....</i>	<i>240.750</i>	
Tipo de gravamen, 1'50 por 100.....		5.121

INDUSTRIAL

Contribuyentes, 22,760.		
Importe de las cuotas del Tesoro.....	5.930.383	
Múltiplo 15 de la cuotas	88.955.745	
Tipo de gravamen, 1'50 por 100.....		1.334.335

UTILIDADES

<i>Tarifa primera del impuesto. (Procedentes del trabajo).</i>		
Contribuyentes, 7,200.		
Utilidades.....	41.161.000	
<i>Suma y sigue.....</i>	<i>41.161.000</i>	2.247.415

<i>Suma anterior</i>	41.161.000	2.247.415
----------------------------	------------	-----------

Tarifa segunda. (Procedentes del capital, no incluida la Deuda pública).

Contribuyentes, 12.796.

Utilidades.....	202 472.000
-----------------	-------------

243.633.000

A deducir:

Por lo que puede corresponder a personas

no residentes en Madrid, 15 por 100.	36.544.950
---	------------

207.088.050

DEUDA PÚBLICA

Intereses de la misma..... 337.763.000

Puede corresponder a residentes en Madrid.	125.000.000
--	-------------

Utilidad imponible..... 332.088.050

Tipo de gravamen, 1'50 por 100.....	4.981.320
-------------------------------------	-----------

Tarifa tercera. (Procedentes del capital y de trabajo).

Contribuyentes, 314.

Renta imponible.....	3.049.794
----------------------	-----------

Tipo de gravamen, 8'33 por 100 de la renta del local.....	254.047
---	---------

Jornaleros, y, en general, varones de más de diez y ocho años, no clasificados anteriormente, 172.512.

Totales de haberes anuales, a razón de 900

pesetas.	155 260.800
---------------	-------------

A deducir $\frac{2}{3}$ con arreglo a la ley Municipal.	103 507.200
---	-------------

Base imponible..... 51.753.600

Tipo de gravamen, 1'50 por 100 o 4'50 pesetas por individuo.....	776.304
--	---------

TOTAL..... 8.259.086

APLICACIÓN

Administración y cobranza, 6 por 100.	518.068
--	---------

Fallidos o coeficiente de seguridad.....	1.741 018
--	-----------

Compensación del arbitrio sobre inquilinatos	6.000.000	8.259.086
--	-----------	-----------

Igual.

Excmo. Sr. D. Juan Navarro Reverter.

Mi querido y buen amigo: Interrumpido el cambio de impresiones que sobre Hacienda municipal de Madrid empezamos a poco de encargarse usted del Ministerio que con tanto acierto desempeña, y habiendo regresado de su expedición veraniega, estimo que es esta la ocasión de que reanudemos nuestra comunicación escrita, para que de modo definitivo lleguemos a las conclusiones que usted juzgue convenientes y mejores.

No estará demás recordar que hasta la fecha en que usted salió de Madrid, todo se redujo por mi lado, a un tanteo; y que usted se limitó a darme conocimiento de las informaciones que pidió a dignísimos funcionarios de su departamento, sin añadir de su parte nada que pudiera prejuzgar sus personales decisiones. Es decir, que hasta el día, ninguna de las cuestiones que he tenido el honor de someter a su gran autoridad y superior competencia se encuentra prejuzgada; y que en el día disfruta usted de toda la libertad de acción y de criterio que sea necesaria para decidir sobre mis propuestas y la contradicción de que han sido objeto.

Recordará usted bien, que en una de las notas que tuve el honor de entregarle, partía de la base de que había de ir directamente a la supresión del impuesto de inquilinato establecido como sustitutivo del suprimido arbitrio de Consumos. Sobre que la propuesta de esa supresión coincidía con los deseos de ambos y con las indicaciones que usted se sirvió hacerme a presencia del ilustre Sr. Presidente del Consejo de Ministros, existían entonces, y existen hoy, aún en mayor grado, motivos fundadísimos para que el Ayuntamiento prescindiera de utilizar ese impuesto que además de haberse enajenado en absoluto la opinión, tampoco posee la elasticidad y la potencia suficientes para compensar, en la parte que se le asignó, el cupo del impuesto de Consumos suprimido.

En efecto, no produjo en el semestre de su iniciación la cantidad que se supuso, siendo el origen del déficit que como losa de plomo gravita sobre el ejercicio vigente; y no producirá tampoco en el año actual de 1912 la cantidad de seis millones de pesetas calculada. Y eso, que para el actual ejercicio se limitó la exención a los alquileres

menores de 50 pesetas y se compuso la tarifa de gravamen aumentando su intensidad desde los alquileres más bajos y estableciendo el máximo del 15 por 100 desde los alquileres de 2.500 pesetas, lo cual constituyó un recargo de verdadera consideración.

Puede afirmarse, y no tengo inconveniente en repetirlo, que el impuesto de inquilinato, aunque se perfeccione el cobro del mismo y los contribuyentes se prestaran gustosos a pagarlo, cosa lejos de ocurrir, no producirá en el ejercicio vigente la cantidad presupuesta y de nuevo ocasionará otro déficit de tanta importancia o más que el pasado; y como esto es de capital importancia y debe a mi juicio, pesar en el ánimo de usted, me he de permitir la demostración *à priori*, puesto que aún faltan más de tres meses para la liquidación del ejercicio.

En el primer trimestre del año actual, todo el cargo líquido a los recaudadores fué de 1.245.657'03 pesetas, haciéndose efectivas 922.908'16; y quedando para el apremio 322.744'87.

En el segundo trimestre el cargo líquido se elevó a 1.204.760'37; haciéndose efectivas 895.659'58; y quedando para el apremio pesetas 309.100'79.

En el tercer trimestre el cargo líquido ascendió a 1.213.312'18; no siéndome posible en el día que escribo fijar lo cobrado (desde luego guardará proporción normal con lo obtenido en los dos primeros trimestres) y lo pasado al apremio, por no haber llegado al término del período voluntario de cobranza.

Se ve claramente que en ninguno de los tres trimestres del año actual que están próximos a transcurrir, el cargo a los recaudadores se ha elevado a 1.500.000 pesetas, que sería el apremio, aparte el cobro del mismo, para que la cantidad de 6.000.000 de pesetas calculada fuese efectiva. Esta sola consideración bastaría para que el Ayuntamiento se decidiese, después de muy meditado, que le interesa vivamente la manera de restañar una herida por donde se le irá la vida y el crédito que había logrado restaurar a fuerza de grandes desvelos y sacrificios.

Pero no hay que pensar en buscar el remedio reorganizando el arbitrio y modificando su ordenanza. Eso sería temerario; además de injusto, si el remedio no consistiera en la absoluta desaparición de todas las exenciones que han convertido el impuesto de inquilinato en una carga limitada a varios, sin asomo siquiera de razón que abone que no sea gravamen de toda la vivienda sin cuenta para nada de la condición ni circunstancias del inquilino. Esto sería impuesto de

inquilinato; lo que hoy existe se llama así para ocultar la injusticia enorme de su organización y manera de percibirse, pero no es más que una contribución que por odiosa excepción pagan un limitado número de contribuyentes y de la que están libres total o parcialmente, otros.

Y el remedio urge, porque, aparte las necesidades crecientes de una población que se desarrolla, lo cual exige mayores gastos en cada ejercicio, concurren, desgraciadamente, otros motivos para que la situación económica del Ayuntamiento de Madrid sea cada día más angustiosa y comprometida por la progresiva disminución de sus ingresos.

Desde enero del año actual,—mi deber es hacerlo constar, para que usted se dé exacta cuenta del estado de las cosas,—han sido varias las exenciones y anulaciones de arbitrios e impuestos decretados por la Superioridad, y varios los fallos adversos para el Ayuntamiento, dictados por los Tribunales: todo ello con pérdida de cantidades que ascienden a crecida suma, y que representan para el porvenir una baja considerable de tributación.

Por fallo de la Diputación provincial, estimando el recurso de agravios interpuesto por la Compañía de Tabacos contra el decreto de la Alcaldía que denegó la exención solicitada para los locales, plaza del Rey, 4 y carrera de San Jerónimo, 38, tienda, ha revocado dicho decreto, infiriendo un perjuicio al Erario municipal, de 3.662 pesetas.

Por fallo, asimismo, de la propia Diputación, estimando el recurso de agravios formulado por D. Francisco Lastres, a nombre de la Compañía francesa de Seguros «Le Phénix» y «Du Phénix», contra otro decreto de la Alcaldía, se accede a la exención pretendida del arbitrio de inquilinato, resultando de ello un perjuicio para el Ayuntamiento, de 15.000 pesetas.

Por Real orden del Ministerio de Hacienda se ha declarado con derecho a exención del arbitrio de inquilinato a las personas de las familias y servicios de los Generales, Jefes y Oficiales de las dotaciones de los buques de la Armada; y tal resolución producirá una baja en los ingresos, de 15.000 pesetas.

Por fallo de la Diputación provincial, se ha estimado un recurso del Procurador, D. Máximo Cánovas del Castillo, contra la cuota del 15 por 100 sobre la renta íntegra del local, y, en su consecuencia, se ha decidido que al expresado contribuyente, considerándosele como ocupante del local dedicado a industria o comercio, debe reducirsele

la base del arbitrio de inquilinato al 25 por 100 de la renta; a pesar de que la ley y reglamento de supresión del impuesto de Consumos establecen con toda claridad que sólo gozarán de exención los locales o parte de los mismos que contengan máquinas, artefactos, etc., que no admiten la posibilidad de ser habitados, y en modo alguno los locales dedicados al ejercicio de profesiones, oficinas y similares; doctrina que producirá al Ayuntamiento una baja en sus ingresos, de 10.000 pesetas.

Por el Gobierno civil se ha estimado el recurso de agravios formulado por el Abogado, D. Gabriel López Olías, contra la cuota ordinaria del arbitrio, impuesta sobre la renta del local ocupado, y ha resuelto que la cuota que debe imponerse a dicho señor «toda vez que ejerce una industria», a la que destina parte de las habitaciones, es la correspondiente a la cuarta parte de los alquileres; resolución que representa una baja para el Erario municipal de 100.000 pesetas.

La Delegación de Hacienda, estimando el recurso formulado por el Notario, D. Francisco Moragas, en nombre del Colegio Notarial de Madrid, contra las cuotas del arbitrio de inquilinato impuestas por el Ayuntamiento, ha declarado que para la exacción del arbitrio por los locales de los Notarios, debe exceptuarse la parte destinada a oficinas y archivos de protocolo, por tratarse de oficinas públicas semejantes a los Juzgados; teoría que ha de producir una baja al Ayuntamiento de 30.000 pesetas.

Por Real decreto del Ministerio de Hacienda se ha exceptuado del arbitrio sobre bebidas espirituosas, espumosas y alcoholes, a los vendedores de artículos de perfumería y tocador, no obstante que al hacerse por la Hacienda al Ayuntamiento la compensación del impuesto de Consumos, se tuvo en cuenta el rendimiento de las patentes de los establecimientos que expenden dichos artículos; y que, por consiguiente, se produce una baja, sin compensación, de 21.000 pesetas.

El Tribunal provincial de lo Contencioso Administrativo ha revocado una providencia del Gobierno civil, que desestimó un recurso formulado por la Asociación de propietarios y ha mandado excluir del presupuesto municipal el concepto de multas sobre edificios no saneados, que califica de *arbitrio*. Debo advertir que se trata de penalidad señalada para los casos de inobservancia de los bandos y disposiciones de Policía urbana que dispusieron la instalación de retretes inodoros, sifones y tuberías de ventilación en todas las viviendas;

faltas que pueden castigarse con arreglo a la ley Municipal con imposición de multas hasta 50 pesetas, y, por tanto, el Ayuntamiento y la Alcaldía proceden dentro de sus facultades exclusivas al imponer tales multas, y cumple las disposiciones de la circular de 19 de junio de 1886, sobre formación de los presupuestos, al incluir el producto de dichas multas en el presupuesto municipal. De prevalecer dicha resolución, el quebranto para la higiene y la salubridad será grande, pero la baja para el Erario municipal será de 350.000 pesetas.

Por Real orden del Ministerio de la Gobernación, interpretando la regla 8.^a del art. 137 de la ley Municipal, resolviendo una instancia consulta de los Sres. Lebón y Compañía y otras Sociedades productoras de gas y electricidad, se modificará substancialmente la situación de hecho y de derecho existente hoy entre el Ayuntamiento y las Empresas de producción de fluido eléctrico y gas, con un perjuicio para el Erario municipal, de 500.000 pesetas, y quedará sentado un criterio legal en cuanto a la cuota máxima de los arbitrios que pueden imponerse sobre las dichas industrias, que traerá una baja en el presupuesto de la Villa, no inferior a 700.000 pesetas.

Por pequeña alteración, más bien de forma que de fondo, que introdujo el Ayuntamiento en las tarifas del arbitrio de consumos sobre las hortalizas y verduras, a instancia de la Asociación de horticultores y agricultores de Madrid y su provincia, que determinó una Real orden de Gobernación accediendo a lo solicitado, se ha sostenido por el Concejo un pleito con el arrendatario de Consumos, que ha terminado por sentencia del Tribunal Supremo, de 31 de mayo último, condenando al Ayuntamiento al pago de 108.063'36 pesetas, por cada uno de los años que ha durado la contrata, o sea en números redondos, de unas 600.000 pesetas.

Y, por último, por la Delegación de Hacienda, decidiendo un recurso contra el arbitrio sobre la venta de bebidas espirituosas y alcoholes, formulado por los hoteles de Ultramar, Málaga y Barcelona, y fundándose, entre otras razones, en que los dueños de fondas y hoteles son más bien compradores que vendedores para el consumo directo de dichas clases de bebidas, ha declarado exceptuados del arbitrio a aquellos industriales, produciendo una baja que no será menor de 20.000 pesetas para el Ayuntamiento.

En suma, que desde enero a la fecha, se han adoptado, sin hacer mención de otras, muchas resoluciones en casos particulares, acuerdos que afectan a los ingresos del Ayuntamiento y que le producirán

de presente y de porvenir una baja 1.996.000 pesetas, en sus presupuestos corrientes y en los que deba confeccionar para los años siguientes, si tales cosas no se remedian.

De todos modos no cabe hacerse ilusiones. Ciertamente que la recaudación de los ingresos presupuestos para 1912 se viene realizando con gran celo; y, debido a ello, hasta el día 18 del presente mes, arroja un total de 21.150.809 pesetas, cantidad que excede próximamente en dos millones de pesetas, a la recaudada en igual período del año anterior; pero, el déficit que hacía tiempo desapareció de la Casa de la Villa, reapareció al finalizar el ejercicio de 1911, representado por la suma de 3.400.944'87 pesetas. Esta cantidad pasó a ser cargo del ejercicio vigente porque suprimido por la ley de 5 de agosto de 1893, el período de ampliación para la Hacienda pública por Real decreto de 21 de marzo de 1905, se aplicó el precepto legal a la Hacienda municipal, con lo que se perturba anualmente dicha hacienda, se contraviene la disposición de la ley Municipal de que los presupuestos municipales se formulen nivelados, y se confunde la responsabilidad del que administró, sin fortuna, con sucesor, haciendo a la vez que éste sufra las consecuencias de un déficit que no le es imputable. Antes de 1905, en el período de ampliación se liquidaba el presupuesto cancelado, y la resulta pasaba al presupuesto adicional, lo cual, además de revelar la forma en que se administró, o la fortuna con que se recaudó, no complicaba el organismo del presupuesto nuevo, ni obligaba a éste a responder con sus ingresos calculados para atenciones que no podía prever antes de terminar el ejercicio y que, por consiguiente, no fueron dotadas, no obstante, lo cual, hay que pagarlas con los fondos ordinarios.

Tal absurdo tiene, necesariamente, ahora cual nunca, que gravitar sobre el ejercicio vigente, cuyo presupuesto de 30.355.908'98 pesetas, a las doce de la noche del día 31 de diciembre de 1911, se convirtió automáticamente en la suma de 33.754.853'85; siendo éste el importe de los gastos, mientras los ingresos quedaban estacionados salvo, relativamente, pequeña cifra que ha sido liquidada y ha dejado reducido el importe de los créditos autorizados para este ejercicio, a la cantidad de 33.103.037'87 pesetas.

Pero, es que, aun sin tener en cuenta el aumento que por ministerio de la ley sufre el presupuesto para 1912, todo hace temer que, no obstante, la recaudación que se viene realizando, resulte el déficit temido al finalizar el presente ejercicio.

Contestando al interrogatorio sobre los efectos de la supresión del impuesto de Consumos, primera pregunta del mismo, hube de manifestar que en la aplicación de la ley de 12 de junio de 1911 y su reglamento, no ha producido hasta ahora las ventajas debidas en la Administración municipal, ni en la estructura, organización y resultado de su presupuesto, por causa:

1.º De haberse implantado la ley, sin el previo avalúo de los recursos sustitutivos que asegurasen una compensación efectiva al Ayuntamiento, de la supresión del impuesto de Consumos, conforme se efectuó con ocasión de la ley de 7 de agosto de 1907.

2.º De haberse señalado para la sustitución dos arbitrios—el de solares y el de bebidas espirituosas, espumosas y alcoholes—, sobre cuya materia tenía establecidos el Ayuntamiento en sus presupuestos ordinarios arbitrios por 1.070.956'66 pesetas, que no se tuvo en cuenta para la compensación.

3.º De la considerable baja operada en Madrid en el precio del flúido eléctrico.

4.º De los conciertos efectuados por el Ministerio de Hacienda con los dueños y empresarios de espectáculos públicos, con reducción al tercio del gravamen legal.

5.º De las restricciones llevadas al reglamento en lo referente al arbitrio sobre los solares sin edificar.

6.º De la falta de tiempo para preparar una verdadera matrícula para la exacción del arbitrio sobre los inquilinatos, ya que la ley no permitió al Ayuntamiento la cobranza directa de los propietarios de las casas.

7.º De las exenciones establecidas en el reglamento con relación al arbitrio sobre los inquilinatos y a las concedidas al amparo del mismo, con posterioridad a la implantación.

Naturalmente, todo esto debía pesar, y pesa, para impedir el desarrollo del presupuesto vigente de ingresos, sin contar además la baja considerable que ha sufrido la recaudación de pesas y medidas por virtud de la resolución que en su día fué dictada por el Gobierno civil, y que varió la forma de su exacción.

Con todos estos antecedentes no es aventurado suponer un déficit de dos millones de pesetas. Para fundamentar este cálculo, conviene dividir en dos grupos el total de 3.355.908'98 pesetas que suman las cantidades calculados como ingresos, dándonos el siguiente resultado:

Pesetas.

Por pesas y medidas, solares, espectáculos, alumbrado, inquilinato, bebidas, carnes y contribuciones, se calcula un ingreso de.....	18.944.731
Por los demás conceptos del presupuesto se calculan	11.411.177'98

Veamos ahora el resultado que a la fecha del 13 del mes actual, nos ofrece la recaudación por cada uno de los grupos indicados:

Pesetas.

PRIMER GRUPO.....	18.944.731
Por cada un trimestre.....	4.736.182'75
Por tres trimestres.....	14.208.548'25
Recaudado.....	12.077.070'81

Déficit..... 2.131.477'44

SEGUNDO GRUPO	11.411.177'98
Un trimestre	2.852.794'49
Por tres trimestres.....	8.558.383'49
Recaudado.....	8.706.536'42

Superávit..... 148.152'93

En los conceptos expresados se indica un exceso de recaudación de 148.152'93 pesetas.

Es preciso consignar para no aventurar conjeturas infundadas, que no es nada difícil que el déficit aumente, y en cambio es muy fácil que quede anulado el exceso por la recaudación anterior.

Comprenderá usted después de lo consignado, tan prolijamente como he estimado que debía hacerlo para que usted aprecie en toda su extensión la situación de las cosas, y el problema que es preciso resolver si ha de llegarse a una Hacienda local saneada, que se hace preciso que el Ayuntamiento al suprimir el arbitrio de inquilinato que se hace odioso, que ya no es posible reorganizarlo y que carece de extensión y de potencia para asegurar el ingreso que el Ayunta-

miento de Madrid necesita para cubrir sus atenciones, recurra a otro arbitrio de mayor difusión de mayor equidad y de mayor potencia tributaria.

Siendo Concejal del Ayuntamiento de Madrid, y en la sesión extraordinaria de 3 de diciembre de 1904, tuve el honor de presentar a los presupuestos municipales que se discutían, una enmienda, y de pronunciar en su apoyo un discurso, que pueden verse en el acta de la sesión y en un libro que con el título *Trabajos varios*, publiqué en 1905.

En aquella proposición estimaba llegada la oportunidad de marcar una orientación en materia de presupuestos que condujera al Ayuntamiento sin apresuramiento, pero definitivamente en pocos años, a la resolución del problema municipal madrileño, que es neta y sencillamente un problema económico.

Proclamé la necesidad de llegar a un presupuesto de gastos, bien dotado con un presupuesto de ingresos positivos y ciertos, afirmando que no había otro camino, como primer paso para la organización de la Hacienda municipal, que el de ir derechamente al repartimiento general, el impuesto más justo y que más concuerda con el precepto constitucional de que cada uno contribuya a las cargas públicas según sus utilidades y haberes.

Que no se haya utilizado hasta aquí, —decía yo en aquél entonces,—no es razón para que no se utilice desde ahora. Hagamos acto de contricción y propósito de la enmienda, y utilicémoslo, porque una vez implantado y arraigado el repartimiento general, será la muerte del impuesto de Consumos, y además se podrá prescindir de pequeños impuestos, tan odiados como el de Consumos, por la opinión.

Y concluí proponiendo que se acordase ir al repartimiento por vía de ensayo, como preparación de un censo tributario, por la cantidad de 1.500.000 pesetas para el año 1905; y que en el año 1906 se aumentase la cantidad repartible, hasta la necesaria para dejar libre la carne del impuesto de Consumos, y así sucesivamente en los años siguientes, hasta la cifra precisa para abonar al Estado el encabezamiento de consumos y suprimir en absoluto todo gravamen por este concepto sobre las especies tarifadas a la sazón.

Discutí extensamente con el Sr. Ruiz de Grijalva, primer Teniente de Alcalde y Presidente de la Comisión de Hacienda, que patrocinaba la creación del impuesto de inquilinato, que yo combatí decididamente; y el Ayuntamiento sin atreverse a resolver de plano mi pro-

puesta, acordó por moción del Alcalde Sr. Marqués de Lema, que se sometiese a estudio, y que en un plazo de seis meses, y con motivo de la discusión de un presupuesto extraordinario que había de formarse por el Ayuntamiento, se decidiese si había llegado la ocasión de utilizar el repartimiento general en Madrid.

Nombrado Gobernador de esta provincia algunos meses después, salí del Ayuntamiento y no me fué dable insistir en mi propuesta, pero pensando hoy como ayer, y convencido de que no hay camino posible para que el Ayuntamiento tenga un presupuesto de ingresos que no sea un artificio, ni un conjunto de cifras sin valor, caprichosamente colocadas, que el de ir al repartimiento general, mi primera nota entregada a usted, fué la de que se sustituyera el arbitrio de inquilinato por el repartimiento general.

Presenté a usted las *bases* que a mi juicio deberían tenerse en cuenta al organizarse el dicho repartimiento; las cuales reproduzco al final como apéndice núm. 1. Y presenté a usted asimismo, una nota de cálculo de lo que podría producir el repartimiento; la que también reproduzco al final como apéndice núm. 2.

En la nota explicativa de las dichas *bases* y del cálculo de ingresos, manifesté a usted que la suma de *seis millones de pesetas*, que la Corporación necesitará para compensar la supresión del inquilinato, podría fácilmente obtenerse; y a esto podrá usted recordarme que en la mano del Ayuntamiento está el usar de ese recurso legal, puesto que la ley Municipal y la de 12 de junio de 1911 le facultan para ello; pero yo debo manifestar a usted que el Ayuntamiento podrá obtener fácilmente los seis millones de pesetas si le aseguran las garantías más sólidas para que la exacción resulte rápida, sencilla y ordenada, y sin molestias para los obligados al pago, cosa que no podrá conseguirse con lo estatuido en la ley Municipal en punto a la evaluación y reparto de cuotas; es decir, que yo estimo que para que el Ayuntamiento pueda con toda libertad y de modo positivo establecer y organizar el repartimiento general sin que constituya otro fracaso, precisa que previamente se resuelva por el Gobierno y las Cortes, sobre varios particulares que detallé en las notas presentadas a usted, y que habré concretamente de fijar en ésta, mi nueva comunicación.

Aventura, sin duda, el repartimiento general al impuesto personal directo, al que podría recurrirse para dar solución al problema, por cuanto adoptando la forma de distribución equitativa y socialización

del gravamen que caracteriza al impuesto personal, limita el repartimiento la acción impositiva a lo indispensable para las cargas y servicios públicos, constituyendo por sí solo una base segura de la Hacienda local una vez organizado convenientemente.

Pero el repartimiento general de la ley Municipal vigente, obra consumada de previsión y que tradujo como ningún otro precepto el constitucional de que todo ciudadano debe contribuir a las cargas públicas con arreglo a sus haberes, necesita un retoque que facilite su práctica y desarrollo, y evite a la vez dificultades que, si tratándose de Madrid no se han hecho patentes por la experiencia, el más sensible espíritu de observación puede adivinarlas sin gran esfuerzo.

La vigente ley Municipal señala el repartimiento en su art. 136 como recurso para cubrir todas las atenciones del pueblo, en cuanto para ello no alcancen las rentas y productos de bienes, derechos o capitales del Municipio y los arbitrios e impuestos ordinarios, haciéndole extensivo a todos los vecinos y hacendados en proporción a los medios o facultades de cada uno. La ley de 12 de junio de 1911, por su parte, señala en su art. 6.º el repartimiento general, como gravamen ordinario que podrán establecer los Ayuntamientos de los Municipios en que fueren suprimidos los Consumos, pero en último término, si bien autoriza a los Ayuntamientos para que acudan al repartimiento, antes que al arbitrio sobre inquilinato o simultáneamente con éste, si así lo consideran beneficioso a sus intereses. La limitación de ambas leyes, sobre que no obedece a motivo racional alguno, merma la libertad del Ayuntamiento para usar de todos y de cada uno de los recursos legales que sean indispensables para cubrir las atenciones del pueblo; libertad necesaria y precisa, pues nadie más interesado, ni nadie con mayor conocimiento de causa puede estimar lo que constituye su conveniencia y su necesidad.

Pero hay más. El art. 138 de la ley Municipal establece las reglas para efectuar el repartimiento, y esta reglamentación, es, a mi juicio, el motivo de que la mayoría de los Ayuntamientos no hayan hecho uso de aquél, nutriendo, en su defecto, los presupuestos con arbitrios extraordinarios; reglamentación de suyo complicada y obstrusa, que, impediría hoy en las grandes poblaciones hallar en el repartimiento el medio racional y único posible de cubrir la baja de los Consumos y la supresión del arbitrio sobre inquilinato.

A la simple vista saltan las dudas, omisiones y faltas de adaptación a los grandes núcleos urbanos que se advierten en el art. 138 en

concordancia con el cap. III, título 2.º del Código orgánico de los Ayuntamientos.

La regla 1.^a del propio art. 138 de la ley Municipal, evidencia con toda claridad que el espíritu del legislador se encamina a que la materia imponible se constituya con todas las utilidades del individuo radicantes en la población, aludiéndose expresamente en la regla 4.^a del apartado 2.º, a los intereses de capitales o rentas públicas de cualquiera clase o procedencia; y es evidente, y lo confirma la acertada definición que hace la ley de Presupuestos de 1900, pues las utilidades no obtenidas por el trabajo, pueden formarse por la sola posesión de capital o por la asociación del capital y el trabajo. Estas rentas, por consiguiente, no pierden su condición de *utilidades*, y así como no deben ser tratadas como aquéllas, tampoco pueden ser igualadas a las que produce el trabajo individual como elemento de producción; y puesto que la propia regla 4.^a del párrafo segundo, hace materia imponible las utilidades del trabajo y la regla 6.^a obliga a contribuir a los jornaleros, y, en general, a los varones mayores de diez y ocho años, dicho se está, que no debe existir excepción a favor de nada que signifique utilidad proveniente de la posesión de cosas que le reporten o que sean susceptibles de engendrarla.

Esta idea relacionada con la diferencia que económicamente es de apreciar respecto a las utilidades, conduce a señalar otra singularidad, como lo es la cuantía de la riqueza poseída, y, por consiguiente, la de las rentas o utilidades de que goza el individuo; pues nadie aprecia hoy de igual modo, ni sujeta bajo la inflexibilidad del tipo único para el gravamen al poseedor de capital en tal cuantía, que se eleva sobre la categoría de rico y que por el hecho de poseer tanto, no siente el fisco, al igual que el dueño de un capital moderado. La progresión del impuesto está tan universalmente admitida que no precisa proclamar la conveniencia de su implantación; luego no asentándose sobre tales esencias la ley Municipal, precisa que, dentro del concepto general que para el repartimiento establece el art. 138, y muy especialmente atendiendo al espíritu de proporcionalidad en el tanto por ciento de que se habla en el segundo párrafo de la regla 4.^a, que fuera progresivo también el tipo de gravamen sobre la utilidad total valuada.

Por la regla 2.^a, apartado 5.º del dicho art. 138 de la ley Municipal, se establece que a los comerciantes, industriales y demás comprendidos en las tarifas de la contribución industrial, se les **valuará**

la utilidad imponible en proporción a la cuota que por este concepto satisfagan al Estado, no bajando de cinco ni excediendo de veinte veces el importe de dicha cuota; siendo varias las dudas que se ocurren respecto a la aplicación de este precepto. Entre ellas la más importante, la que origina el silencio que se observa respecto a la entidad a quien corresponde fijar las reglas para la determinación de las utilidades de cada industria, dentro de los límites máximo y mínimo que establece la ley. Debe esto ser aclarado; si bien a mi juicio correspondiendo al Ayuntamiento la facultad de determinar la cantidad total que haya de ser objeto de repartimiento y la que parcialmente ha de aplicarse a cada clase o sección, parece lógico que al Ayuntamiento también corresponda establecer *à priori*, para que la distribución se ajuste a la equidad, las bases de imposición para determinar la utilidad industrial compatible y que a esta determinación tendrían que ajustarse los encargados del reparto.

Relacionado con esta misma cuestión sería asimismo indispensable determinar si la utilidad imponible ha de evaluarse solamente por la cuota del Tesoro o por la acumulación de ésta y los recargos municipales; si las patentes, como comprendidas en las tarifas de contribución industrial, han de someterse para la determinación de la utilidad imponible a las mismas reglas que se adopten para los industriales; y, finalmente, si teniendo en cuenta la forma en que se lleva a cabo el reparto de la contribución industrial, ha de tomarse como base para la determinación de la utilidad imponible, la cuota reglamentaria o la que individualmente se aplique por reparto gremial a cada industrial.

Estimo asimismo que, dada la cuantía de la suma total a repartir, no sería conveniente realizar la exacción de una vez, porque de hacerlo así se cometería una verdadera arbitrariedad por cuanto la propiedad urbana y los valores mobiliarios cambian continuamente y en grandes masas de poseedor, dentro del año, y por ello el repartimiento no descansaría sobre los buenos y acertados principios de equidad en que está inspirada la ley, pero seguir semanal o trimestralmente la Administración municipal el movimiento de transmisión de los bienes y rentas es absolutamente imposible, por costoso, molesto y vejatorio para los vecinos.

Y si tales dificultades se presentan a la Administración municipal, producidas por la reglamentación del art. 138, por lo que hace a la creación de las cuotas de repartimiento, no son menores las que ofre-

cerían las operaciones preliminares, como formación de secciones para realizar el reparto, fijación de cuotas, reclamación y resolución de los agravios, etc. Basta la lectura del dicho artículo y tener noticia de los ejemplos que ofrecen en esas pequeñas operaciones los pequeños pueblos, para deducir la consecuencia de que en Madrid es impracticable el repartimiento general, sobre las bases estatuidas.

De todo lo antedicho hemos hablado usted y yo, y se han cambiado notas, así como de lo que yo estimo fortuna para resolver el problema, a saber: el actual sistema de contribuciones e impuestos del Estado y la organización que alcanza en punto a inspección y contabilidad, porque ello proporciona el medio mejor de realizar el repartimiento general conforme a los principios cardinales de la ley, sin gastos notables para el Ayuntamiento y sin molestias inmotivadas para los contribuyentes, con la ventaja además de que la cuota anual establecida podrán satisfacerla fraccionada.

Fijado por quien corresponda el tipo del gravamen por los distintos conceptos de utilidades que señala el art. 138 de la ley Municipal, deberá realizarse la exacción conjuntamente con la contribución o impuestos del Estado, al igual de como lo practica para los recargos municipales sobre dichas contribuciones, percibiendo el Estado un tanto por ciento por el servicio de cobranza. Esto es de capital importancia, aunque no sea absolutamente imprescindible para realizar la cobranza del repartimiento, por lo que respecta a la exacción de las cuotas que no sean de los jornaleros o braceros, y, en general, de todo varón mayor de diez y ocho años no comprendido en el repartimiento por otro concepto. Las cuotas de éstos podrán fácilmente realizarse por medio de recibo trimestral o por un timbre o sello municipal adherido al dorso de la Cédula personal, por cuanto del padrón anual para la cobranza de este impuesto, se deducirán simultáneamente los obligados a contribuir al repartimiento, por aquel carácter.

Además, para evitar retrasos en la confección de matrículas, listas cobratorias y en todo lo referente a la contribución de urbana, rústica y pecuaria, el Ayuntamiento podría mantener a sus expensas en la Delegación de Hacienda una sección de funcionarios municipales, que, en relación con la Administración de Rentas y Arbitrios municipales, formase los padrones y relaciones nominales de contribuyentes sujetos al repartimiento.

De igual modo y con el mismo fin podría mantener una sección dedicada a relacionar los obligados por el concepto de «Utilidades», en las tres tarifas del impuesto.

Por tal manera, y con un buen servicio en las oficinas municipales para el despacho rápido de las devoluciones por ingresos indebidos, podría llevarse a cabo sin grandes molestias para las oficinas provinciales de la Hacienda, y ninguna para los contribuyentes, la exacción de la cuota de repartimiento; porque seguir el procedimiento de evaluación, reparto y cobranza que señala la ley Municipal, no tendría otra consecuencia que la de evidenciar que el repartimiento general, es más molesto y ofrece mayores dificultades para la Administración, que el arbitrio sobre inquilinato, aparte la deficiencia recaudatoria que es fácil prever, al menos mientras por el transcurso de algunos años, no se llegase a un censo de contribuyentes y a la organización completa del servicio.

Sobre todo lo antedicho, que constituyó como el preámbulo de mis propuestas de reforma de las leyes que se refieren al repartimiento general, pidió usted informe a dignísimos funcionarios del Ministerio, y usted tuvo la bondad de darme traslado de dos contranotas, que podríamos así llamar, y que le devuelvo. Acerca de ellas escribo ahora por primera vez, para hacerme cargo de las indicaciones que contienen.

No son muy benévolos, acaso por desconocimiento del organismo municipal, los dignísimos funcionarios de ese Ministerio, con las modestas observaciones del Alcalde de Madrid que reconoce, desde luego, su incompetencia al lado de la sin duda, muy acreditada de ellos. Uno, hasta comenta sobre conceptos y palabras por mí no emitidas ni escritas; aparte de la estimación que hace de incongruencias entre el preámbulo y la propuesta de reforma. Es a ésta a la que habremos de atenernos, porque si en el preámbulo se preconizó, en efecto, la imposición progresional, se hizo sin otro objeto que demostrar la falta de adaptación a los grandes núcleos urbanos del repartimiento reglado por la ley Municipal, y deducir en conclusión que ese recurso es impracticable en Madrid, bajo la estricta aplicación de la ley de los Ayuntamientos.

Por lo demás, tratando yo de reducir al límite posible las operaciones precedentes y subsiguientes a la recaudación de la cuotas del repartimiento, y comprendiendo que la progresión es, efectivamente, incompatible con el sistema de retención directa que habría de adop-

tar para la mayor parte de la cifra del repartimiento, desde luego no tengo inconveniente en aceptar el tipo único de gravamen.

Pero estimado que sea en principio por usted el proyecto de reforma, y fijadas a modo de definitivas las bases del reparto y de la recaudación, entonces, —y contesto con esto a una observación de la contranota—, el Ayuntamiento solicitará en forma, del Gobierno de S. M., la autorización para la cobranza por el Estado, de determinadas cuotas. Antes, y perdóneme el autor de la contranota, sería adelantarse a los sucesos y prejuzgar las resoluciones de los que han de intervenir en todo este asunto.

He dicho que es a la propuesta de reformas, y no al preámbulo, a la que debemos atenernos; y procede, e interesa a usted y a mí, que fijemos concretamente lo propuesto, lo que se ha dicho examinando las reformas, y aquello en que convengo con la impugnación, y, en definitiva, mi juicio acerca de lo que deberá establecerse si la superior autoridad de usted lo estima acertado y provechoso, para el interés público.

Como preliminar de toda reforma, estimo imprescindible la del artículo 136, párrafo quinto de la ley Municipal, y la del art. 6.º, letra G y párrafo final. Al Ayuntamiento de Madrid, puesto que de Madrid tratamos, y sus condiciones y circunstancias no son las de cualquier pueblo de España, debe concederse la facultad de acudir al repartimiento cuando lo estime conveniente y necesario, sin tener que supeditar su establecimiento a ninguna de las limitaciones y cortapisas de ambos preceptos legales.

Una de las contranotas, que sigue paso a paso la nota mía, se reserva el juzgar la propuesta; advierte que en esta parte, como en otras de la misma, impera el optimismo respecto del repartimiento, del que no espera una realidad que corresponda a mis esperanzas, —no dice porqué—, lo cual me releva de combatir la afirmación, y sólo supone que la aspiración del Ayuntamiento, al pretender la reforma de los preceptos legales en cuestión, parece consistir en poder establecer el repartimiento general sin imponer el arbitrio sobre las carnes.

Contestaré que no hay tal, que no es tan mínima la razón de la reforma. Se trata de hacer legalmente posible la subsistencia del repartimiento en todo caso. Puede ser uno de ellos la suspensión o transformación del arbitrio sobre las carnes, acerca de lo cual el Ayuntamiento tiene acuerdos tomados y pendientes de la sanción del

Gobierno, pero lo que desea es que el Ayuntamiento pueda acudir al repartimiento, no en el orden de prelación de la ley de 12 de junio de 1911, ni con la limitación que establece la Municipal.

En cuanto a la concurrencia de un optimismo que la realidad no confirme, mi opinión sobre el repartimiento es que reúne ventajas técnicas para obtener recursos locales en crecida suma; si bien el procedimiento señalado por la ley Municipal para llegar a la matrícula del reparto, tratándose de grandes poblaciones, a más de prestarse a grandes errores e injusticias, retrasaría considerablemente la operación. De aquí que, respetando la ley Municipal y la de 12 de junio de 1911, en cuanto es prácticamente posible, estime como factor del éxito, que habrá que acudir a las matrículas de contribución territorial y subsidio como elementos ya preparados, y a la acción del Estado, para evitar molestias a los contribuyentes con duplicidad de recibos, etcétera.

Propuse después en mi nota la reforma de la regla 7.^a del art. 137 de la ley Municipal, reforma que estimo de absoluta necesidad en el sentido de que se aclare, declarando la subsistencia de los arbitrios sobre industrias que se ejerzan en la vía pública, en el caso de que el Ayuntamiento renuncie a recargar en el 5 por 100 la cuota del repartimiento señalado a estas industrias.

En la contranota se estima que lo pedido no es una aclaración, sino una reforma de la regla que tiende a la compatibilidad de los arbitrios sobre industrias callejeras y el reparto; y haciendo «la salvedad de que la reforma que se propone agravará por regla general a infelices pobres del Municipio», se dice que no hay otro reparo que oponer.

Hay error evidente nacido del desconocimiento del organismo municipal. La reforma no afecta, como se dice, a «infelices pobres», sino al gremio de alquiladores de carruajes de lujo, a los vendedores ambulantes (que desean y les conviene pagar el arbitrio para mantener cierto derecho a ejercer la industria), a los dueños de coches y carros de punto, por cuyos conceptos percibe el Ayuntamiento anualmente 270.000, 150.000 y 35.000 pesetas, respectivamente, y a otros varios conceptos.

Propuse que en la regla 2.^a, base 1.^a del art. 138 de la ley Municipal, se fijase como utilidad imponible la renta resultante de deducir del líquido imponible amillarado, las cuotas y recargos por todos conceptos; y habiéndose hecho observaciones dignas de ser acepta-

das en la contranota, deberá entenderse la propuesta de reforma en el sentido de que únicamente la cuota del Tesoro se tendrá por deducible del líquido imponible.

Sobre la reforma de la base 2.^a de la regla 2.^a del art. 138, existe conformidad entre la nota y la contranota, naturalmente haciendo el avalúo de igual modo que en el caso anterior y en la proporción que señala la ley Municipal.

Propuse la reforma de la base 5.^a de la dicha regla y artículo, en el sentido de que sirviera para el avalúo la cuota de las matrículas de la contribución industrial, y estimando aceptables las observaciones de la contranota, se desiste de toda reforma.

Acerca de la base 6.^a de la regla y artículo en cuestión, dije en la nota por vía de cálculo que, en la imposibilidad material de evaluar el salario de todos los que viven de un jornal, había que adoptar como base general el jornal de tres pesetas devengado durante trescientos días, o sean, 900 pesetas, de las que se rebajaría las dos terceras partes conforme a la ley Municipal.

En la contranota se considera inadmisibile lo antedicho, por estimar que el haber medio de un bracero no se puede fijar por una ley para todos los tiempos y todos los Municipios, siendo esa determinación de la competencia de los organismos administrativos locales, cuya competencia sin duda se pretende cambiar. «En buena hora—dice la contranota—, pero no puede llevarse este precepto general a la ley, ¡por que trescientos días de jornal a tres pesetas diarias en Andalucía y Extremadura!»

Debo objetar que yo me refiero a Madrid, y que debe legislarse para Madrid, porque repito que sus condiciones y circunstancias son en efecto muy distintas que las de cualquier otro pueblo de Andalucía, de Extremadura o de cualquiera otra región.

Y debo manifestar también que no se trata de cambiar la competencia para determinar el haber medio del bracero. Esta estimación debe practicarse por los organismos municipales y por lo que a Madrid se refiere, existiendo numerosos jornales con 5, 6, 7 y hasta con 12 pesetas de haber, y base de trabajo con descanso obligatorio de sesenta días al año, no es elevado, no puede estimarse elevado el haber medio general para toda la población obrera de 3 pesetas en trescientos días. Pero repito que se trata de un cálculo para establecer el del rendimiento por este concepto, y para eso hablé de ello sin otra finalidad.

Con referencia a la base 7.^a de la regla 2.^a del art. 138 de la ley Municipal, propuse se evaluara la utilidad imponible en caso de desconocimiento de la misma, en razón de la renta del local que ocupase el vecino, y la contranota lo estimó inadmisibile por las razones que tuvo a bien. Examinadas éstas, no veo inconveniente en aceptar el sentido de las observaciones que se han hecho a mi nota, y, en consecuencia, la base 3.^a, regla 7.^a del proyecto de *Bases del repartimiento* (apéndice núm. 1), puede quedar redactada en armonía con la ley Municipal, en la forma que aparece del apéndice núm. 3.

Sobre las reglas 3.^a, 4.^a, 5.^a, 6.^a y 7.^a del art. 138, expresé a usted que ante las complicadas operaciones que envuelve el procedimiento estatuido por la ley Municipal y los abusos a que se presta tratándose de grandes poblaciones, sería preciso al organizar el repartimiento partir de las matrículas de la Hacienda para fijar la utilidad imponible individual, máxime que en urbana está comprobada la riqueza, y en industrial existen los repartos gremiales; en cuanto a las utilidades por rentas de capitales, es indudable que están bien conocidas por la formalización para pago del impuesto de utilidades.

Como verá usted en la contranota que le devuelvo (apéndice número 4), se estima lo antedicho como el punto saliente de la cuestión. Ni lo desconozco ni lo niego; pero no puedo allanarme a ninguna de las observaciones que se hacen por infundadas y por suspicaces.

Nadie pretende penetrar en el secreto de la clientela de los Bancos y banqueros; ¿para qué?; basta con que el Estado haga extensiva a las cuotas del repartimiento las prevenciones en punto a penalidad por ocultación o defraudación del impuesto de utilidades.

Cualquier medida, que sin quebrantar el secreto de la clientela evite en lo posible la ocultación, sería aceptada por el Ayuntamiento, como asimismo la transformación de las cuotas sobre las rentas de valores mobiliarios en una participación equivalente en los ingresos del Tesoro por impuesto de utilidades.

No puede existir dificultad insuperable en la facturación de cupones, conocida como es, de los Bancos y banqueros la residencia de los clientes por la declaración que precede a la imposición de depósitos, aperturas de % de crédito, etc.

El Ayuntamiento facilitaría las facturas del modelo y color que se le indicase y abonaría a los Bancos y banqueros el premio que se dediciase por su servicio de Tesorería.

El Ayuntamiento montaría en la Delegación de Hacienda un servicio auxiliar tan extenso como requiriesen los trabajos de preparación de los recibos de urbana, rústica y pecuaria y subsidio, sin retraso alguno para el Estado, abonando la impresión de los nuevos modelos de recibos, listas cobratorias y de cargo, etc.

En cuanto a los cotejos de las matrículas de territorial e industrial, tan en absoluto como se indica, no lo creemos de necesidad. La singularidad de cuota para los propietarios que no tengan la consideración de vecinos de Madrid, y para los colonos, arrendatarios o aparceros, no es tan extensa que dificultara las operaciones.

No creo sea necesario insistir más sobre el tema para que usted comprenda hasta qué punto está exagerada la nota al sospechar en peligros e incompatibilidades que no pueden ni deben existir, porque el interés del Estado no puede ser otro que el de que el Ayuntamiento de la Capital de la Nación pueda vivir y desenvolverse.

Con referencia a la regla 8.^a del art. 138 dije a usted que no veía inconveniente en que siguiera igual que está redactada; pero en la contranota se hace observar que entonces la contabilidad se haría enteramente imposible, dado el sistema de retención que mi propuesta preconiza.

Replicaré que siendo mi propósito hacer fáciles y breves las operaciones, el Ayuntamiento podría renunciar en caso preciso a recargar las cuotas con el 6 por 100, quedando establecida la base en los términos que aparece con el núm. 8 en el apéndice núm. 3.

Sobre la regla 9.^a del art. 138 indiqué en la nota que podía mantenerse: pero en la contranota se observa que cambiada la estimación de las utilidades de rústica, hay que cambiar la regla en consonancia con la nueva forma de estimación de aquellas rentas. Estimo acertada la observación y podría en consecuencia redactarse la base en la forma que aparece con el núm. 9 en el apéndice 3.

Por último, y en lo que se relaciona con el repartimiento, pedí a usted en mi nota una reforma del párrafo cuarto del art. 14, en forma que no alarmara a ningún timorato. Yo estimo que el haber establecido que el tipo de gravamen en las capitales de provincia y poblaciones de 10.000 o más habitantes, no podrá exceder en ningún caso del 1'50 por 100, constituye una limitación que puede en un caso determinado condenar a un pueblo a que no pueda cubrir sus atenciones. Precisa dejar a los pueblos mayor libertad para sus presupuestos si se quiere que tengan hacienda y vivan a la moderna.

En la contranota se observa que el tipo del gravamen de un repartimiento no se puede fijar de antemano por nadie, puesto que por definición es un cociente; y precisamente por eso es por lo que yo propongo la reforma del precepto legal, porque limitar a 1'50 equivale a fijar de antemano el tipo del gravamen.

La contranota, entiende, además, que el repartimiento es recurso de la ley Municipal a la que expresamente se refiere la de Consumos, y, por tanto, es de la competencia de Gobernación y no de Hacienda, la fijación del tipo. Olvida la contranota que el repartimiento, aparte de hallarse reglamentado en la ley Municipal, es recurso *sustitutivo* de la ley de 12 de junio de 1911; pero en fin, yo entendía que al Gobierno debía corresponder el cuidado de que el tipo del reparto fuese el necesario y bastante para los fines de la ley, y de ahí la propuesta; pero puede quedar encomendada su fijación a la Junta municipal, más sin la limitación del 1'50 por 100 que puede ser motivo para que las atenciones municipales queden incumplidas.

En la contranota (apéndice núm. 4), se hacen observaciones encaminadas a examinar el cómputo del rendimiento del reparto en proyecto al que se refiere el apéndice núm. 2; examen particularizado a *utilidades, deuda pública y jornaleros*, con una conclusión acerca del producto que estima probable el autor de dicha contranota y que ciertamente no concuerda con mis cálculos.

No he de contestar punto por punto a ninguna de las observaciones que contiene la contranota a que me refiero, porque haría esta carta más extensa, y no tengo derecho a molestar a usted sin justificación, doblemente cuando usted juzgará de las observaciones en cuestión con la autoridad que tiene y con la imparcialidad que acostumbra.

Si por lo que se refiere al concepto del *rendimiento del reparto*, he de recordar lo que ya he dicho en otro lugar, o sea que aceptadas en términos generales las observaciones que se me hacen, se deducirá del líquido imponible de urbana y rústica, únicamente la cuota del Tesoro, y que no se rebajará el recargo extraordinario de 4 por 100 de Ensanche; y recordaré asimismo que se ha aceptado por industria y comercio el múltiplo 15 sobre las cuotas consolidadas. Dicho se está, por consiguiente, que parte de las dificultades a que la contranota se refiere, han desaparecido.

En cuanto al particular, *utilidades*, diré que el Alcalde de Madrid no posee otros datos sobre este impuesto que los antiguos e insuficientes para los cálculos que nos ocupan, que contienen las estadís-

ticas publicadas por el Ministerio de Hacienda con relación al año 1907. De desear es, dentro del propósito de acierto que en bien de todos perseguimos, que el Ministerio con los grandes elementos y capacidades de que dispone, aporte a las razones que expone, atinadas en su mayoría seguramente, los valores numéricos que las producen para que se establezca la inteligencia y conformidad que deseamos. En tanto se nos dan a conocer los valores estadísticos necesarios para establecer con exactitud los cálculos, expondremos que, en opinión de personas conocedoras de estos asuntos por razón de sus cargos y profesión, el importe de los intereses de valores que perciban las personas residentes en Madrid en los vencimientos de 1 de abril, 1 de julio y 1 de octubre, es de 45.000.000 de pesetas en cada trimestre; y de 60.000.000 en 1 de enero; en total 195.000.000 que difieren 86.000.000 de la cifra tomada por base por el Ayuntamiento, y que representaría una baja en los productos del reparto, de 1.290.000 pesetas, comprendida, por tanto, dentro del coeficiente de seguridad establecido, con más la contribución directa del Estado. Además, no hay que olvidar:

1.º Que el gravamen recae sobre los residentes, y

2.º Que si bien las Compañías mercantiles que explotan industria o comercio, no pueden comprenderse en el reparto, tanto la ley Municipal como la de 12 de junio, no excluyen del repartimiento las utilidades individuales que procedan de acciones u obligaciones de otras varias Compañías.

Y, por último, en cuanto se relaciona con el particular *jornaleros*, he de manifestar que el núm. 172.512 computado en el proyecto, no se ha obtenido del Censo de 1900 ni del padrón de habitantes de 1910: se ha deducido del empadronamiento para el impuesto de cédulas personales del año actual, tomando todos los jornaleros y varones mayores de diez y ocho años sin profesión, estudiantes, etc., y que por las razones expuestas en otro lugar, no puede admitirse la computación del haber medio y jornada anual, que se opone al proyecto, por cuanto el jornal de 2'50 pesetas, es ya en Madrid el mínimo, y el obrero no huelga ciento cinco días al año.

La segunda contranota (apéndice núm. 5), parece escrita en un rato de mal humor; desde luego acusa en su autor sentimientos de poca benevolencia, no diré de hostilidad, para el Ayuntamiento. Parece el grito herido del que no quiere partícipes en la posesión pacífica de la Hacienda pública, estimada por algunos técnicos y antiguos.

funcionarios de la Administración, como coto redondo a donde no puede ni mirarse, no ya entrar.

A ella opondré algunas observaciones inspiradas en sentimientos menos egoístas, más no la refutaré tampoco punto por punto, porque usted juzgará con entera imparcialidad, y sobre todo, con la alteza de miras necesaria para que el interés del Estado estribe en favorecer el del Ayuntamiento de Madrid, a fin de sacarle de la comprometida situación que atraviesa.

La propuesta de sustitución del arbitrio sobre los inquilinatos no debe ser juzgada con la crítica que permite una idea nueva, sino con la consideración que exige el propósito del Gobierno, elevado a ley; y así como la Alcaldía reserva sus juicios en materia de política económica y trata por el contrario de utilizar el repartimiento como integrante de la obra del Gobierno, es de esperar que en su propósito de buscar una solución al desacreditado arbitrio sobre los inquilinatos, no ha de encontrar más que la ayuda y consejos para consolidar lo fundamental de dicha ley, como es su deber.

Si, como creemos, no debe ni siquiera iniciarse una radical reforma de la ley de 12 de junio y el arbitrio sobre los inquilinatos ha caído en la impopularidad, no queda otro recurso utilizable que el repartimiento en sus principales esencias, dejando para más adelante el perfeccionamiento de la imposición que una observación continuada y celosa vaya marcando.

Evidentemente que debiera contribuir la aristocracia territorial forastera, más para ello se impondría una reforma tan radical de los artículos 136 y 138 de la ley Municipal, que equivaldría a borrar el reparto de la ley fundamental de los Ayuntamientos, dado el principio en que descansa.

Por lo que hace a los proletarios, habría que discernir bien el concepto para aplicar con justicia la liberación sostenida de contrario. Sobre este respecto, la Alcaldía contribuye al criterio que dominó en la Comisión extraparlamentaria para sustituir el impuesto de Consumos, y se afirma hoy más en la conveniencia de que contribuyan todos ante las enseñanzas que han traído las exenciones hechas para la exacción del arbitrio sobre inquilinato. Los inconvenientes de este arbitrio, observados en Madrid, creemos que se presentarán en las demás grandes capitales de España, y, por consiguiente, la reforma legislativa que se propone puede y debe tener carácter general. Siendo así no puede ocurrir la liberación de las rentas mobiliarias que se presente.

El dato de la defraudación que se cometería en el caso apuntado del arquiler de 76.000 pesetas anuales, no puede servir de argumento, puesto que el Sr. Marqués de Larios, a quien sin duda se hace referencia, es una excepción del caso general. No es necesario el coitejo que se dice con los padrones de vecindad. En el proyecto de Ordenanza del repartimiento ya se consigna que durante el mes de octubre se recibirán en el Ayuntamiento las reclamaciones para *exclusión*.

Respecto a la determinación de las rentas mobiliarias no vemos los peligros ni las dificultades apuntadas. Se dice que en los países con impuesto sobre la renta, los comisionados para la estimación determinan el importe de la renta de cada procedencia, y que nuestra ley Municipal encomienda esa determinación a los contribuyentes de la Junta municipal, reunidos en secciones. Es de presumir que aquellos comisionados y las secciones de la Junta municipal necesiten por lo menos inquirir de las dependencias del Estado, Provincia y Municipios, Bancos, etc., para hacer la estimación ¿cómo va a negarse al Ayuntamiento lo que es permitido a un grupo de contribuyentes? Además, así como el Estado tiene señaladas severas penas a los Bancos y Sociedades para en caso de ocultación o defraudación del impuesto de utilidades, del mismo modo podría procederse con relación a las cuotas del repartimiento. Esto, unido a que la Banca en general conoce por manifestación, y hasta por declaración individual, la vecindad o por lo menos la residencia de sus clientes o comitentes, aleja los pesimismos en que se inspira la impugnación.

Si no se quiere dar acción directa a los Ayuntamientos en las rentas mobiliarias, otórguesele un recargo sobre el impuesto de utilidades, tarifa primera y segunda y siempre que el tipo de ese recargo represente el 1'50 por 100 de las utilidades deducido el impuesto del Estado, el de Madrid se tendrá por bien compensado al suprimir el arbitrio de inquilinatos.

La ley Municipal no permite comprender en el reparto a los residentes en Madrid sin vecindad en el mismo por las fincas que posean fuera de esta Capital; únicamente les puede ser imputadas en Madrid las demás utilidades que obtengan. Modificar sobre este respecto, la ley Municipal equivaldría a tanto como suprimir de ella y de la ley de 12 de junio el repartimiento, y la Alcaldía no tiene otro propósito que el de asentar del mejor modo la ley sustitutiva de Consumos y éste no puede lograrse prácticamente más que con la decidida ayuda del

Estado para las operaciones de recaudación de las cuotas por rentas de fincas, industria y comercio, sueldo e intereses de capital.

Y nada más me resta por exponer con relación al repartimiento.

Y como es justo que ponga término a esta larga carta, lo haré, pero no sin recordar a usted el particular a que voy a referirme y que fué objeto de nuestras conversaciones y de mi primera nota.

El Excmo. Ayuntamiento de Madrid, en virtud de la facultad que concede la regla 4.^a, art. 137 de la ley Municipal, tenía establecida al promulgarse la ley de supresión del impuesto de Consumos, una patente autorizando la venta de bebidas espirituosas o fermentadas en establecimientos fijos o por mercaderes, trajineros, cosecheros o fabricantes, y sobre los cafés, fondas, botillerías, hospederías y otros establecimientos del mismo carácter, que le producía un ingreso de 400.000 pesetas anuales, que sin la menor protesta de los contribuyentes se repartía por los gremios.

Las excelencias del arbitrio hicieron, sin duda, pensar en él al estudiarse la ley de supresión del impuesto de Consumos, señalándole con alguna modificación, como uno de los sustitutivos, presuponiéndole en 870.000 pesetas anuales y de esto resultó, que siendo incompatible aquella patente con el nuevo arbitrio semejante, se privó al Ayuntamiento de Madrid de 400.000 pesetas de ingreso.

Por igual razón de incompatibilidad hubo de renunciar el Ayuntamiento al arbitrio sobre vinos espumosos y generosos, dado en compensación por la ley de 7 de agosto de 1907, del que obtenía pesetas 166.546'30, y se renunció asimismo al arbitrio del 20 por 100 sobre alcoholes, aguardientes y licores, cedido por igual ley y que rentaba 109.207'16 pesetas. Es decir, que se privó al Ayuntamiento de pesetas 675.753'36, sin compensación por la ley de 12 de junio de 1911.

Por estas razones y atendiendo a que el arbitrio actual sobre bebidas no produce en la práctica lo que presupuso el Ministerio, para la compensación, se impone en justicia la reforma del art. 12 de la expresada ley de 1911, redactándole del tenor siguiente: «Los arbitrios sobre bebidas espumosas, espirituosas y alcoholes, revestirán precisamente la forma de patente. Éstas se regularán por las cuotas asignadas en la tarifa de la contribución industrial y de comercio, sin que en ningún caso pueda exceder del importe de la cuota que hubiese atribuído el gremio al interesado en el reparto de la contribución».

De este modo podrían compensarse al Ayuntamiento 200.000 pesetas de las 775.000 de que ha sido privado por la ley de 1911.

En la contranota, apéndice núm. 4, se estima que la reforma no presenta ningún inconveniente serio, salvo la resistencia que puedan oponer los industriales a que se eleve el importe del máximo autorizado. Tengo entendido, y por eso propongo la reforma, que no será grande, si hay alguna resistencia.

Por último, entiendo que convendría autorizar al Ayuntamiento de Madrid para establecer y cobrar un impuesto sobre la *plusvalía* de los edificios y terrenos beneficiados por las grandes reformas locales. Un recargo sobre la contribución territorial de edificios y solares en calles donde el Ayuntamiento realiza grandes reformas de urbanización, por un número de años, al modo que está establecido para el Ensanche, sobre ser justo, daría al Ayuntamiento recursos para acometer esas mismas obras en beneficio general.

Y terminaría aquí, si no estimara que debo hacerlo pidiendo algo más a usted, a saber, que se fije en las peticiones que he hecho contestando al interrogatorio formulado con motivo de la información abierta a virtud de la Real orden de 11 de julio último, sobre las ventajas e inconvenientes de la ley de 12 de junio de 1911.

Contestando a la cuarta pregunta, he pedido a usted los siguientes recursos:

a) Facultad para cobrar el arbitrio de pesas y medidas en los dos mercados de abastos o a la entrada en la población, a voluntad de los introductores, asignando una cuota equivalente al 1 por 100 del valor promedio de la mercancía, acusado en el último trienio a todas las especies que comprende el Real decreto de 7 de junio de 1891.

b) Reintegrar al Ayuntamiento el derecho a percibir los arbitrios de almotacenía y repeso.

c) Cesión al Ayuntamiento del impuesto del Estado sobre el consumo de gas, electricidad y carburo de calcio.

ch) Cesión al Ayuntamiento del impuesto de timbre sobre billetes de espectáculos.

d) Señalamiento por el Estado, a título de recurso de compensación, de la cantidad que represente el recargo municipal de 16 por 100 sobre las cuotas que satisfacían por contribución de subsidio las industrias, profesiones, Bancos y Sociedades, a raíz de la ley de 18 de junio de 1885.

Y, contestando a la quinta pregunta, he consignado textualmente lo que sigue:

Tratándose de una población esencialmente consumidora, debe-

rían introducirse en la ley de 12 de junio de 1911, para llegar a constituir una Hacienda municipal sólida, holgada e independiente, las siguientes modificaciones:

El Ayuntamiento cesaría en la percepción de los siguientes recargos y arbitrios:

	Pesetas.
16 por 100 sobre la contribución de urbana.....	1.491.526'59
32 por 100 sobre la de industria y comercio.....	2.000.000
Arbitrio sobre los inquilinatos.....	6.000.000
	<hr/> 9.491.526'59

Cesaría, asimismo, en el pago de las siguientes atenciones:

	Pesetas.	
Instrucción primaria obligatoria.....	758.182'88	
Contingente provincial.....	3.250.000	
Locales de Juzgados.....	35.000	
Gastos carcelarios.....	404.000	4.447.182'88
	<hr/>	<hr/>
<i>Ingresos a compensar.....</i>		5.044.343'71

El Estado podría señalar en compensación la cuota del impuesto sobre gas y electricidad.....

700.000

Elevación al 100 por 100 de la cuota del 75 por 100 sobre patentes para la venta de bebidas espumosas, espirituosas y alcohólicas.....

217.000

La cuota del impuesto sobre billetes de espectáculos.....

142.000

Participación al Ayuntamiento en los productos del impuesto de utilidades.....

2.250.000

Cesión al Ayuntamiento, del Canal de Isabel II, con todas sus pertenencias, cargas y derechos, a título de segundo mayor partícipe.....

1.800.000

5.109.000

SOBRANTE.....

64.656'29

Esto vendría a establecer una Hacienda municipal *independiente*. Para que pudiera conseguirse que llegara a ser *sólida y holgada*, sería preciso que el Estado, siguiendo el ejemplo de otros, señalase a Madrid, a título de subvención y con destino exclusivo a uno de sus servicios, a la sustitución de los pavimentos, por ejemplo, la suma de *dos millones de pesetas*, quedando por efecto de la subvención totalmente saldado el débito del Estado, acusado en la liquidación general practicada.

Termino, y pido a usted mil y mil perdonos por la molestia que le produzca este largo alegato; pero hacerlo era mi deber.

Mucho espero de usted, que es tan amante de Madrid; de usted que tantas veces, en nuestra antigua y constante amistad, me ha repetido que la solvencia del Ayuntamiento de Madrid es cuestión de decoro nacional; creo que usted leerá esta carta con ánimo decidido y resuelto de ayudar al Ayuntamiento y a su Alcalde. Si vacila será por falta de acierto en mí; en tal caso, a usted le sobra inteligencia para rectificar mi trabajo y recoger, del mismo, la aspiración para conceder lo que se deba conceder en beneficio del interés público.

Queda de usted, como siempre, su buen amigo que le quiere de veras y b. s. m.,

J. Ruiz Giménez.

Madrid, 22 de septiembre de 1912.

Excmo. Sr. D. José Canalejas, Presidente del Consejo de Ministros:

Mi distinguido amigo y Jefe: Conocía usted el propósito, que ya he realizado, de decir por escrito, y con todo detalle al Excmo. Sr. Ministro de Hacienda, la verdadera situación del Ayuntamiento de Madrid, y tengo el gusto de remitir a usted copia de la carta en la que, a financiero de tanta autoridad y competencia como el Sr. Navarro Reverter, expongo con toda sinceridad, al lado del estado económico de la Hacienda municipal, los remedios a mi juicio pertinentes.

No he vacilado en dirigirme al Sr. Ministro de Hacienda, porque, como usted sabe, toda la conversación seguida sobre la materia, lo ha sido con él, y porque además, parece que tratándose de la aplicación de la ley de 12 de junio de 1911, todas sus incidencias caen bajo la jurisdicción del Ministro de Hacienda.

No obstante, como usted es el Jefe de todos, y con usted he hablado de estos asuntos muchas veces, y en usted he encontrado siempre apoyo, consejo y aliento, usted subsanará cualquier omisión y rectificará la dirección de mis demandas, llevándolas a donde proceda para que se resuelvan como mejor importe al interés público.

En la carta al Sr. Ministro de Hacienda, pido reformas legislativas que afectan a la ley Orgánica de los Ayuntamientos y a la ley de supresión de los Consumos. Parece que la materia cae bajo la jurisdicción de dos Ministerios; pero desde luego bajo la jurisdicción de usted, Jefe de todos.

Pido al Sr. Ministro de Hacienda medios para que el repartimiento general, sea el sustitutivo eficaz del arbitrio de inquilinato; pues entiendo que si éste sigue establecido en el ejercicio próximo, se producirá grave conflicto, aparte la agravación del déficit municipal. Entre esas medidas está el que se verifique el cobro por retención directa. Un técnico del Ministerio de Hacienda, ha estimado para Madrid absurdo el repartimiento; y otro absurdo, la retención directa; y ha dicho con benevolencia digna de la mayor estimación, que se trata de dos absurdos; y es que el técnico ha olvidado, que el repartimiento general, es recurso autorizado por la ley Municipal para todos los Ayuntamientos, sin excepción de Madrid, y por la ley de 12 de junio de 1911 para sustituir el suprimido arbitrio de Consumos,

y que por retención directa percibe el Ayuntamiento de Madrid, como todos los de España, el recargo sobre las contribuciones territorial e industrial.

Lo que se propone, por consiguiente, es estrictamente normal; y si se acude al Gobierno, es porque la reglamentación de la ley ofrece dificultades y puerta abierta, a abusos que deben evitarse.

De cualquier modo, sobrada es la sabiduría de usted y de sus dignos compañeros de Ministerio, para escoger entre mis observaciones lo que sea utilizable, o para iniciar lo que pueda conducir al objeto que se persigue; salvar la Hacienda municipal y asegurar a Madrid los recursos necesarios para el desenvolvimiento de su vida, como capital de España y pueblo a la moderna.

Y como siempre encontré en usted un propósito decidido en el sentido de que así ocurra, he de manifestarle que el Ayuntamiento, tiene una gran confianza en que usted Jefe del Gobierno, inclinará la balanza en favor de Madrid, caso de que surgiera alguna dificultad.

Lo espera en la resolución urgente e inexcusable de la supresión del inquilinato con la adopción a la par de los medios para que sea sustituido con ventaja; lo espera en la resolución del acuerdo adoptado sobre el servicio de abastos de carne que está sometido al Excelentísimo Sr. Ministro de la Gobernación en instancia de 10 de julio último; lo espera en la favorable resolución de la instancia que se dirigió al propio Sr. Ministro de la Gobernación, y que se reitera en la que envió adjunta sobre auxilios por el Estado para poder realizar la definitiva pavimentación de Madrid; lo espera en la resolución solicitada del Excmo. Sr. Ministro de Fomento para aprovechar las aguas residuarias de la Villa; y lo espera de la resolución pendiente hace tiempo del propio Ministerio de Fomento sobre cesión al Ayuntamiento de los terrenos que ocupa el Hipódromo a cambio de otro Hipódromo que establecería la Corporación municipal a fin de prolongar el paseo de la Castellana hasta su enlace con la carretera de Francia.

Con la favorable resolución de las instancias sobre abasto de carnes, aparte la terminación de un monopolio injusto y odioso, se conseguirá el abaratamiento del artículo y la percepción por el Ayuntamiento, de un ingreso de consideración que hoy aprovechan varios industriales.

Asimismo, con la resolución favorable de la solicitud para que el Estado auxilie con dos millones de pesetas la contratación de un

empréstito para acometer de una vez la pavimentación de Madrid, mediante un proyecto de ley que pudiera ser el que adjunto le remito, el Ayuntamiento descargaría de su presupuesto ordinario una cantidad respetable, y concluidas las obras de canalización para conducciones de electricidad, gas, etc., conseguiría un ingreso de consideración.

Igualmente, con la resolución favorable de la propuesta de autorización al Ayuntamiento para que explote el aprovechamiento de sus aguas residuarias, aparte el beneficio general para la agricultura, constituiría una fuente de cuantiosos ingresos para las arcas municipales.

Y asimismo, por último, con la cesión de los terrenos del Hipódromo mediante el proyecto de ley que pudiera ser el que envío a usted, conseguiría el Ayuntamiento cuantiosos ingresos por los terrenos sobrantes, después de aprovechar los necesarios para vía pública y jardines, aparte la importante reforma de hacer un paseo que desde Atocha conduzca a la carretera de Francia en su enlace con la de Chamartín; el más largo y hermoso del mundo.

No dudo que usted concederá a todos estos asuntos su intervención decisiva: y que mediante ella podrá el Ayuntamiento de Madrid ver con gusto cómo se aleja de sus ojos el temido déficit, y el lamentado fracaso de toda una política económica municipal que aún es tiempo de enderezar con seguro resultado.

Por mi parte estaré aquí en este puesto de confianza para secundar a usted con todo celo, con el mayor esfuerzo, y con el sacrificio personal que sea necesario en la obra que usted trace y ordene; es ese mi deber y además mi anhelo, pues sirviendo a Madrid cumplo obligaciones de gratitud eterna y dictados de mi corazón.

No hacer nada privará al partido liberal de las simpatías de un pueblo ávido de protección y de amor por parte de los Gobiernos; y limitarme yo a pasar por la Alcaldía y a estar en ella, no diría bien de quien tiene compromisos y antecedentes contraídos con la opinión, durante toda una vida dedicada al examen y defensa de los intereses de Madrid, en el Congreso, en el Ayuntamiento y en la Prensa.

De usted espera todo, Madrid y su Alcalde que le estrecha la mano y le reitera su afecto y su adhesión.

J. Ruiz Giménez.

Septiembre, 23-912.

Sr. Vicepresidente de la Comisión de Hacienda:

Mi distinguido amigo y compañero: Después de largas conversaciones sostenidas con el Excmo. Sr. Ministro de Hacienda, respecto de la Hacienda municipal, y especialmente del presupuesto, y relacionadas con la situación creada por la ley de 12 de junio de 1911, he creído oportuno condensar en un escrito particular dirigido a dicho señor, el criterio sostenido por la Alcaldía acerca de problemas tan graves para el porvenir de la Administración municipal, proponiendo las soluciones que a mi juicio creo pertinentes; y como considero un deber mío dar conocimiento a los Sres. Concejales y singularmente a las Comisiones respectivas, de las gestiones que realizó en los diversos ramos de la Administración, juzgo que también será grato para ustedes conocer el referido escrito, y en este sentido tengo el gusto de acompañarle el adjunto ejemplar, que le ruego estudien con su reconocido celo por esta Casa municipal.

Sin perjuicio de este trámite puramente oficioso y del estudio que ustedes hagan, cuando llegue la oportunidad de dar carácter oficial al mismo, tendré sumo gusto en avisar a ustedes en igual forma.

Se reitera suyo afectísimo amigo y compañero, q. s. m. b.,

J. Ruiz Giménez.

Octubre, 1, 1912.

ÍNDICE

	Páginas.
Dificultades que ofrece el procedimiento establecido por la ley Municipal	3
Procedimiento de exacción que se impone en las grandes capitales	6
Modificaciones que se proponen de la ley Municipal y de la de 12 de junio de 1911	7
Apéndice núm. 1.—Primer proyecto de bases para el establecimiento y régimen del repartimiento general	9
Apéndice núm. 2.—Cálculo para determinar la utilidad imponible de los contribuyentes	12
Segunda nota a la Memoria.—Propuesta de reformas	15
Cómputo del rendimiento del reparto	18
Utilidades	18
Jornaleros	19
Segunda nota a las bases del repartimiento	20
Apéndice núm. 3.—Bases definitivas para el repartimiento general	22
Cálculo para determinar la utilidad imponible de los contribuyentes	25
Carta al Excmo. Sr. Ministro de Hacienda	27
Carta al Excmo. Sr. Presidente del Consejo de Ministros....	55
Carta al Sr. Vicepresidente de la Comisión de Hacienda....	58